



CONTRADICCION DE TESIS 31/98.

"saldo a su cargo y la requiera de pago, lo que no
"ocurrió en el caso, por lo que la accionante carece
"de legitimación activa para demandarlo, en virtud
"de que el crédito no se encuentra vencido; pues si
"bien la citada tesis establece que cuando se
"pactan intereses a tasa variable es necesario que
"el banco informe al deudor sobre su causación y
"en su caso su monto, para declarar en mora al
"deudor; es indudable que dicho criterio no es
"aplicable al caso concreto, ya que aparte de que
"en el contrato de apertura de crédito se estableció
"la forma de cuantificar los intereses ordinarios y
"moratorios y no especificó que el acreedor tuviera
"que hacer periódicamente del conocimiento del
"deudor el importe de los mismos, como lo
"mencionó la responsable, sino por el contrario,
"en la cláusula sexta se acordó el lugar de pago y
"se precisó que se haría sin previo requerimiento,
"conforme a los lineamientos establecidos en el
"propio acuerdo de voluntades, y en la cláusula
"décima segunda, se pactó el vencimiento
"anticipado del contrato para el caso de que el
"acreditado faltare a cualquiera de las obligaciones
"contraídas o no pagara puntualmente una
"exhibición de capital o de sus intereses, y como
"de acuerdo con el artículo 78 del Código de
"Comercio, en las convenciones mercantiles las
"partes se obligan en la manera y términos que

***"aparezca que quisieron hacerlo, sin que la validez
"del acto comercial dependa de la observancia de
"formalidades o requisitos determinados; es
"indudable la inaplicabilidad al caso concreto de la
"tesis referida y que el banco no tenía obligación
"de comunicar al quejoso la causación y el monto
"de intereses, para que los pagara, por lo que
"correctamente se consideró que no está
"acreditada la excepción de falta de legitimación y
"que el crédito cuyo pago se exige se encuentra
"vencido."***

3. Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito. Amparo directo **160/98** (identificado en el legajo de ejecutorias, con el número 181). María del Socorro Espíritu Jiménez. 2 de abril de 1998. Unanimidad de Votos:

***"Se sostiene que, es inconstitucional la sentencia
"reclamada en donde considera que para que la
"demandada no se constituyera en mora era
"preciso ocurriera ante las oficinas de BANCOMER,
"S.A., en las fechas indicadas en el calendario de
"pagos para saber el monto mensual que debía
"cubrir y que hubiese sido el banco el que se
"negare a informarle la suma a pagar para así estar
"en aptitud de hacer valer que la falta de pago
"oportuno era imputable al banco, ya que contrario
"a ello, si bien es cierto que en la cláusula décima***



"primera del contrato base de la acción se
"estableció que la demandada haría los pagos sin
"necesidad de previo cobro ni recordatorio alguno
"en las oficinas de la actora, dichos pagos no
"estaban determinados en cantidad líquida, ya que
"ni el importe de los pagos mensuales, ni de los
"intereses se le dieron a conocer, que por ello no
"podía incurrir en mora, pues no existía importe
"líquido a satisfacer, y que no es óbice lo estimado
"por la responsable en cuanto que las partes deben
"estarse a la estipulación del contrato en términos
"del artículo 78 del Código de Comercio, ya que la
"existencia del contrato no determina la
"procedencia de la acción, pues sí está sujeta a
"condiciones para su ejercicio estas deben ser
"satisfechas so pena de no obtener lo pedido."

"Son infundadas tales inconformidades, pues
"como correctamente lo consideró la responsable,
"el hecho de que en el contrato de crédito simple
"con garantía hipotecaria, de fecha doce de marzo
"de mil novecientos noventa y dos, celebrado entre
"el hoy quejoso con el banco tercero perjudicado,
"no se hayan precisado de manera líquida el
"importe de los pagos mensuales de capital e
"intereses a que se obligó la acreditada en razón
"del crédito otorgado por la cantidad de ciento
"ochenta millones de pesos, ello no exime a la

*"deudora de cumplir con la obligación que contrajo
"al celebrar dicho acto jurídico, pues en términos
"del artículo 78 del Código de Comercio, debe
"estarse a las obligaciones que adquirió al externar
"su voluntad en el propio contrato."*

*"En efecto, de la cláusula décima primera del
"contrato fundatorio de la acción (fojas 30 a 39), se
"desprende que la hoy quejosa se obligó a realizar
"los pagos establecidos en el citado contrato, sin
"necesidad de previo cobro o recordatorio alguno
"en las oficinas de BANCOMER, e inclusive se
"precisó en los incisos a), b y c), de la aludida
"cláusula, la forma en que tenía que efectuar los
"pagos correspondientes."*

*"Por ello, es irrelevante para el caso que en el
"contrato base de la acción no se hayan
"especificado en cantidad líquida los pagos que
"tenía que hacer la demandada al acreedor, ya que
"era precisamente la institución bancaria la
"obligada a informarle la suma a pagar, de ahí que
"para que la quejosa no incurriera en mora y por
"ende, se hiciera improcedente la acción intentada,
"debió acreditar haberse constituido en el banco en
"las fechas del calendario de pago también
"acordadas en el referido acto jurídico y además
"demostrar que se le negó el informe con relación a*



"la suma a pagar, a fin de que estuviera en condiciones de hacer valer que la falta de pago oportuno al banco era una cuestión no imputable a ella, sin embargo, como esto último no aparece que haya ocurrido, indefectiblemente que acarreó la consecuencia de que la obligada incurriera en mora por incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato en cuestión."

"Por consiguiente resulta inaplicable al caso la Tesis que cita la quejosa en apoyo a tales inconformidades, ya que si en el contrato base de la acción no se pactaron los pagos en cantidades líquidas, fue porque así lo convinieron las partes, por lo que debe estarse al cumplimiento de su voluntad como Ley Suprema de los Contratos."

Pues bien, al efectuar un análisis individual y comparativo de esas ejecutorias, advertimos lo siguiente:

a) La referida en primer lugar, de entre las dos en las que supuestamente se sostiene que es necesario el aviso del banco acreditante para que el deudor, en caso de impago de los intereses incurra en mora, propiamente no aborda esa temática, de modo tal que pueda dar lugar a ser confrontada en este tópico.

Ciertamente, allí se establece que de acuerdo a la diversidad de mecanismos para poder calcular los intereses convencionales, no queda claro la forma en que se llega a ese monto final por tal concepto, ya que la remisión a los elementos que dan lugar al saldo no es suficiente para conocer tal dato, sino que es necesario que se conozcan también las operaciones que lo ocasionaron; pues en caso contrario, no se da al acreditado la oportunidad de refutar el alcance del cobro líquido. Así, la imprecisión de los intereses emana de que no se conoce una tasa concreta para su cómputo, y por analogía se cita la tesis titulada: **"INTERESES BANCARIOS DE TASA VARIABLE NO PAGADOS, ES IMPROCEDENTE DECLARAR EN MORA AL DEUDOR, SI LA INSTITUCION NO LE COMUNICÓ PREVIAMENTE EL MONTO LIQUIDO QUE DEBE SATISFACER"**.

Es decir, sólo deja por sentado que la diversidad de mecanismos para computar el interés pactado, exige estar enterado tanto de los elementos que se toman en cuenta como de las operaciones que se llevan a cabo para obtenerlo, pues el desconocimiento de estos últimos deja al quejoso en situación de incertidumbre sobre esa deuda, más no establece en momento alguno que, en esa hipótesis, deba avisarse al deudor del monto del crédito para que, de no cubrirlo, incurra en mora, que es la postura que aquí se erige en uno de los criterios en conflicto.

Consecuentemente, debe prescindirse de tal ejecutoria en este tema que se analiza.

CONTRADICCION DE TESIS 31/98.



b) La segunda de dichas ejecutorias que aparece en ese primer grupo, provienen del mismo órgano colegiado que emitió la resolución que figura en tercer lugar en el otro grupo. De igual manera, aparece que aquélla es de fecha anterior a la referida en último lugar.

Así pues, resulta evidente que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, tiene por criterio actual el de que no es necesario que el banco acreditante dé aviso al acreditado para que pueda considerarse que la falta de pago de las amortizaciones coloque al deudor en mora; y de esa manera, se ha apartado del primer criterio que arribaba a conclusión contraria.

Como consecuencia de ese planteamiento, tenemos que en tres ejecutorias más recientes, emitidas por igual número de tribunales colegiados, se sustenta el criterio de que no es necesario que el banco informe al acreditado del monto líquido de su amortización para que éste, ante la falta de pago incurra en mora; en tanto que ninguna ejecutoria obra en contrario.

Ante este estado de cosas, debe concluirse que no existe la contradicción de tesis denunciada, pues no se cuenta siquiera con el elemento esencial de esa disputa, a partir de la cual se haga necesaria la intervención de este Tribunal Pleno.

Así se había pronunciado ya la anterior conformación de este Tribunal Pleno en la tesis **XLIV/94**, visible a fojas 42 del Tomo 81, Septiembre de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, de este tenor:

"TESIS CONTRADICTORIAS. SU CONCEPTO JURIDICO COMPRENDE LAS QUE LO SEAN DESDE EL PUNTO DE VISTA LOGICO Y TAMBIEN LAS DISCREPANTES. La finalidad perseguida por el Constituyente, de que la Suprema Corte de Justicia unifiquen los criterios jurisprudenciales, permite considerar que el concepto jurídico de contradicción de tesis que establece la fracción XIII del artículo 107 constitucional, en relación con los artículos 192, último párrafo, 197 y 197-A, de la Ley de Amparo, comprende no sólo aquellas tesis que desde el punto de vista puramente lógico son contrarias o contradictorias, esto es, que enuncian juicios sobre el mismo sujeto con predicados radicalmente opuestos, sino también las que sin llegar a tal extremo, alcanzan predicados discrepantes o divergentes entre sí, en relación con el mismo sujeto, en condiciones esencialmente iguales y bajo la vigencia de las mismas disposiciones."

CONTRADICCION DE TESIS 31/98.



Sentido al cual también arribó la entonces Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al sustentar esta tesis:

**"CONTRADICCION DE TESIS. PARA QUE SE
 "GENERE SE REQUIERE QUE UNA TESIS AFIRME
 "LO QUE LA OTRA NIEGUE O VICEVERSA. La
 "existencia de una contradicción de tesis entre las
 "sustentadas en sentencias de juicios de amparo
 "directo, no se deriva del solo dato de que en sus
 "consideraciones se aborde el mismo tema, y que
 "en un juicio se conceda el amparo y en otro se
 "niegue, toda vez que dicho tema pudo ser tratado
 "en diferentes planos y, en consecuencia, carecer
 "de un punto común respecto del cual lo que se
 "afirma en una sentencia se niegue en la otra o
 "viceversa, oposición que se requiere conforme a
 "las reglas de la lógica para que se genere la
 "referida contradicción." (Tesis 3a./J.38/93, Gaceta
 del Semanario Judicial de la Federación, Octava
 Época Tomo 72, Diciembre de 1993, página 45)**

Es obligado aclarar que se llega a esta conclusión, porque la contradicción de tesis no puede emerger de dos criterios encontrados que ha asumido un mismo Tribunal Colegiado, que en este caso, lo sería el que deriva del mencionado Primero del Vigésimo Primer Circuito, como enseguida se demuestra.

La Constitución Federal dispone en su artículo 107, fracción XIII, párrafos primero y segundo, lo siguiente:

***"Artículo 107.- Todas las controversias de que
"habla el artículo 103 se sujetarán a los
"procedimientos y formas del orden jurídico que
"determine la ley, de acuerdo a las bases
"siguientes:***

***"...XIII.- Cuando los Tribunales Colegiados de
"Circuito sustenten tesis contradictorias en los
"juicios de amparo de su competencia, los
"Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el
"Procurador General de la República, los
"mencionados Tribunales o las partes que
"intervinieron en los juicios en que dichas tesis
"fueron sustentadas, podrán denunciar la
"contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a
"fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según
"corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer
"como jurisprudencia.***

***"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia
"sustenten tesis contradictorias en los juicios de
"amparo materia de su competencia, cualquiera de
"esas Salas, el Procurador General de la República
"o las partes que intervinieron en los juicios en que***

CONTRADICCION DE TESIS 31/98.



**"tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán
"denunciar la contradicción ante la Suprema Corte
"de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá
"cuál tesis debe prevalecer."**

Por su parte, los numerales 197 y 197-A de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, estatuyen:

**"Artículo 197.- Cuando las Salas de la Suprema
"Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias
"en los juicios de amparo de su competencia,
"cualquiera de dichas Salas o los ministros que los
"integren, el Procurador General de la República o
"las partes que intervinieron en los juicios en que
"tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán
"denunciar la contradicción ante la misma Suprema
"Corte de Justicia, la que decidirá funcionando en
"Pleno cuál es la tesis que debe observarse. El
"Procurador General de la República, por sí o por
"conducto del agente que al efecto designe,
"podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer
"dentro del plazo de treinta días."**

**"Artículo 197-A.- Cuando los Tribunales Colegiados
"de Circuito sustenten tesis contradictorias en los
"juicios de amparo de su competencia, los
"ministros de la Suprema Corte de Justicia, el**

"Procurador General de la República, los mencionados Tribunales o los magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la misma Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El Procurador General de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días."

De lo anterior se desprende que la contradicción de tesis dirimible a través de este procedimiento, puede suscitarse cuando se produzca:

1. Entre las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actualmente Primera y Segunda; o bien,
2. Entre los Tribunales Colegiados de Circuito, ya sea de un mismo circuito o de circuitos diferentes.

Esta conclusión que inobjetablemente deriva de esos preceptos legales, acarrea a su vez esta deducción: no es factible dirimir a través de esta vía la oposición de criterios que emanan de un propio órgano colegiado, sea Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o Tribunal Colegiado de Circuito. Es así porque la vigencia de ambas posturas no es simultánea, sino que



CONTRADICCION DE TESIS 31/98.

suceden en el tiempo por decisión propia del órgano plural respectivo y son muestras de una constante reflexión que les autoriza la plenitud y autonomía de su jurisdicción, y les exige su intervención recurrente en asuntos de características similares. Esto permite que en ocasiones se efectúe un cambio de criterio, supuesto en el cual el que impera es el sustentado en último lugar, porque de esa manera se está abandonando lo que en ocasiones previas lo condujo a conclusión contraria.

Al hacerse cargo de un planteamiento de esta índole, la anterior integración de este Tribunal Pleno sostuvo la tesis **XLIX/94**, publicada en la página 35 del Tomo 83, Noviembre de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, bajo estos rubro y texto:

**"CONTRADICCION DE TESIS. LOS CRITERIOS
 "QUE SE CONSIDERAN CONTRARIOS DEBEN
 "PROVENIR DE ORGANOS DIFERENTES. EI
 "planteamiento de una contradicción de tesis en el
 "ámbito de la justicia federal, ya sea en juicios de
 "amparo o en revisiones de contenciosos
 "administrativos, supone por esencia la existencia
 "de criterios diferentes al conocer de un
 "determinado problema jurídico de condiciones
 "similares. Así, puesto que en aras de la seguridad
 "jurídica, un tribunal jerárquicamente superior debe
 "decidir cuál de las tesis contrarias debe
 "prevalecer con características obligatorias, los**

*“razonamientos a examen deben provenir de
“órganos diferentes.”*

Parecer que también compartieron las Salas Tercera y Cuarta de dicha integración de este más alto tribunal de la Nación, en las tesis que a la letra dicen:

***“CONTRADICCIÓN DE TESIS. IMPROCEDENCIA DE
“LA DENUNCIA CUANDO LAS SUSTENTÓ EL
“MISMO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO,
“Cuando se denuncia la contradicción de tesis pero
“las mismas fueron sustentadas por un mismo
“Tribunal Colegiado, aun cuando haya cambiado de
“nomenclatura por la creación de otro tribunal en
“el mismo Circuito y/o haya variado su
“integración, debe considerarse improcedente la
“denuncia, pues se está en el caso de un cambio
“de criterio, lo que es conforme a derecho, toda
“vez que aún la Suprema Corte puede proceder de
“este modo, llegando incluso a poder interrumpir
“una jurisprudencia.”*** (Tesis CLII/89, de la Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV-Primera Parte, página 218).

***“CONTRADICCIÓN DE TESIS, IMPROCEDENCIA DE
“LA DENUNCIA DE, SI SON SUSTENTADAS POR EL
“MISMO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO.***



"Los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 11, fracción XIII, 24, fracción XII, 25, fracción XI, 26, fracción XI y 27, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sea en Pleno o en Salas, resolver las contradicciones de tesis que en los amparos de su competencia, sustenten dos o más Salas, o dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, para los efectos a que se refieren los artículos 196 párrafo final y 197-A de la Ley de Amparo, de lo que se desprende que para que se configure dicha contradicción, es menester que las tesis sean sustentadas por dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, pues la misma consiste en la existencia de criterios divergentes que provengan de dos o más de esos órganos que versen sobre una misma cuestión jurídica y no a cambios de criterio de los integrantes de un mismo Tribunal."

(Tesis VII/93, Cuarta Sala, Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo XI-Mayo, página 79).

Por otro lado, también conviene aclarar que no es obstáculo para declarar por ahora la inexistencia de contradicción de criterios sobre este tópico, la circunstancia de que una tesis de la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación esté en contradicción con el parecer que aún subsiste, adoptado por los Tribunales Colegiados de Circuito que emitieron las ejecutorias 1497/97, 594/97 y 160/98 (identificadas en el legajo correspondiente, con los números 55, 96 y 181, respectivamente).

La anterior Tercera Sala formuló estas tesis:

***"INTERESES BANCARIOS DE TASA VARIABLE NO
"PAGADOS. ES IMPROCEDENTE DECLARAR EN
"MORA AL DEUDOR, SI LA INSTITUCIÓN NO LE
"COMUNICÓ PREVIAMENTE EL MONTO LÍQUIDO
"QUE DEBÍA SATISFACER.- Es un hecho notorio
"que la determinación de intereses de tasa variable,
"supone un procedimiento complejo, sujeto a
"factores y conocimiento cuyo manejo escapa al
"común de la gente, mientras que los organismos
"financieros tienen a su disposición todo tipo de
"elementos y personal capacitado para hacerlo.
"Así, es de elemental justicia que el banco informe
"al obligado sobre la causación y en su caso, el
"monto de tales intereses, pues lo que para el
"primero puede ser un procedimiento de rutina, con
"el que está familiarizado, para el segundo es un
"problema sumamente difícil de solucionar; en
"consecuencia, para sostener válidamente que una
"persona ha entrado en mora por no pagar dicho
"concepto, es menester demostrar que la misma***



"tuvo oportuno conocimiento del saldo a su cargo, "pues de no ser así, la pretensión en ese sentido "resultará inadmisibile". (Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Volumen 205-216, Cuarta Parte, página 96).

En tanto que, los Tribunales Colegiados Primero en Materia Civil del Tercer Circuito, Tercero del Décimo Tercer Circuito y Primero del Vigésimo Primer Circuito, juzgando supuestos de similares características al tratado en la tesis anterior, aseveraron que no resultaba aplicable.

Sin embargo, al margen de que dichos criterios pudieran ser confrontados o no por provenir de órganos jurisdiccionales de diversa jerarquía, no fue objeto de las denuncias que motivaron este análisis y, consecuentemente, tampoco se ha otorgado al Procurador General de la República la oportunidad de que emita su opinión, tal y como lo exigen los preceptos constitucionales y legales antes transcritos. De manera que por ahora no es jurídicamente factible hacerse cargo, esta Suprema Corte, de esa problemática.

Ante esa tesitura, debe concluirse que sobre este tópico no existe la contradicción de tesis denunciada.

QUINTO.- En la denuncia de contradicción de tesis realizada por el Presidente de la Primera Sala de esta Suprema Corte, se planteó como quinta cuestión jurídica a tratar, el tema

intitulado: **“CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO. CAPITALIZACIÓN DE INTERESES. ¿ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO CIVIL ARTÍCULO 2397, A DICHOS CONTRATOS MERCANTILES?”**; tema que, por cuestión de método se analizará en primer término, debiendo señalarse que del estudio de las resoluciones remitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito que emitieron algún pronunciamiento relacionado con tal cuestión, se desprende que existen tres diferentes puntos de oposición, a saber: si el artículo 2397 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal es aplicable supletoriamente o no a las disposiciones que regulan el contrato de apertura de crédito; si el artículo 363 del Código de Comercio tiene o no aplicación supletoria a la normatividad que se establece para el referido contrato; y, si cuando se pacta en éste la capitalización de intereses en términos del artículo antes citado del código mercantil, para determinar los alcances de tal convención, debe o no acudir-se supletoriamente al numeral 2397 del Código Civil antes referido.

Previo a fijar las posturas contradictorias, debe precisarse que al respecto se toman en cuenta únicamente las ejecutorias emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito que representan el criterio actual del órgano jurisdiccional correspondiente pues, en algunos casos y, por diversos motivos, este se ha modificado. Además, únicamente se transcribe aquélla que se ha estimado como la más representativa del criterio sustentado por el respectivo Tribunal.



I.- Por principio, conviene señalar que el punto total de contradicción que se estudiará se concreta a determinar si para concluir sobre la validez de la capitalización de intereses que se haya pactado en un contrato de apertura de crédito es necesario acudir en forma supletoria a lo dispuesto en el artículo 2397 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, o bien, si los preceptos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito que establecen y regulan el referido contrato son disposiciones que no adolecen de laguna jurídica alguna.

En relación con el punto de contradicción precisado, destaca que los Tribunales Colegiados Octavo en Materia Civil del Primer Circuito, Segundo del Décimo Sexto Circuito, Segundo del Décimo Séptimo Circuito y Primero del Vigésimo Segundo Circuito, al emitir respectivamente las sentencias visibles con los números: 44 y 45; 132 y 136; 138 y 139; y, 190, 191, 192, 194 y 195 del legajo de ejecutorias en contradicción, a que se hace mención en el resultando octavo del presente fallo, tales órganos jurisdiccionales sostienen que el pacto de capitalización de intereses que se convenga al celebrar un contrato de apertura de crédito implica una transgresión a lo dispuesto en el artículo 2397 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, que prohíbe el convenio anticipado de capitalización de intereses, pues en la especie opera la supletoriedad de éste, al

tenor de lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Los argumentos conducentes fueron plasmados por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la ejecutoria número 44 del legajo mencionado, relativa al amparo directo 1088/97, en los siguientes términos:

"Son substancialmente fundados los argumentos anteriores, por los motivos que a continuación se expresan:- - - El artículo 363 del Código de Comercio, establece lo siguiente:- - - 'ART. 363.- Los intereses vencidos y no pagados no devengarán intereses. Los contratantes podrán, sin embargo, capitalizarlos.'- - - Los artículos 8° y 2397 del Código Civil para el Distrito Federal, de aplicación supletoria al caso concreto de conformidad con el artículo 6°, fracción III de la Ley de Instituciones de Crédito, disponen:- - - 'ART. 8°.- Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario.--- ART. 2397.- Las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses.'- - - De las constancias del juicio ordinario mercantil, expediente número 1236/96, origen del acto reclamado, se aprecia que el actor



"reclamó del banco demandado la nulidad absoluta
 "de las cláusulas primera, segundo párrafo;
 "séptima, y de la cláusula decimosegunda; así
 "como la nulidad absoluta del crédito adicional que
 "le fue otorgado por el banco demandado para el
 "pago de intereses, nulidad sustentada
 "fundamentalmente en que a través de dicho
 "crédito adicional se había convenido la
 "capitalización de intereses, prohibida por el
 "artículo 2397 del Código Civil (hechos VI, VII y VIII
 "de la demanda)... - - - De una interpretación
 "armónica del artículo 363 del Código de Comercio,
 "se desprende la existencia de dos supuestos
 "distintos entre sí, a saber: el primero la
 "prohibición de que los intereses vencidos y no
 "pagados devenguen a su vez intereses (pacto de
 "anatocismo); el segundo, prevé la posibilidad de
 "que las partes contratantes puedan capitalizar
 "esos intereses vencidos (capitalización de
 "intereses).- - - Es menester reafirmar que al ser
 "utilizada la palabra 'capitalizarlos', en el segundo
 "supuesto que regula el artículo 363 del Código de
 "Comercio, ello pone en evidencia que a lo que se
 "refiere este supuesto, es a los intereses 'vencidos'
 "que se mencionan en la primera parte del
 "precepto.- - - Además de lo anterior, de la
 "apreciación jurídica del segundo supuesto
 "previsto en el artículo 363 del código citado, es

"evidente la existencia de una laguna en la ley
"mercantil, puesto que en el mismo no establece
"cuándo puede ser pactada la capitalización de
"intereses; aunque si atendemos a la connotación
"gramatical de las palabras 'intereses vencidos',
"tendríamos que llegar a la conclusión de que tal
"pacto tendría que darse cuando los intereses
"hayan sido devengados y no cubiertos, pues
"hasta ese entonces estarían vencidos; sin
"embargo, como el precepto legal de mérito no lo
"menciona expresamente, ello nos conduce a la
"conclusión de que existe una laguna u oscuridad
"al respecto, por lo que es menester acudir en
"forma supletoria a la legislación común de
"conformidad con el artículo 6º, fracción III de la
"Ley de Instituciones de Crédito y 2º del Código de
"Comercio.- - - Así tenemos, que el artículo 2397
"del Código Civil para el Distrito Federal, de
"aplicación supletoria al caso concreto, es claro y
"determinante en que la capitalización de intereses
"no se puede convenir de antemano; dicho de otra
"forma, el Código Civil para el Distrito Federal, al
"igual que el Código de Comercio prevé
"implícitamente la posibilidad de capitalizar
"intereses vencidos, pero cuando tengan esta
"característica y no con anterioridad a que sean
"generados, y la sanción a convenir de antemano
"tales intereses es la nulidad, conforme al precepto



*"legal invocado con antelación.- - - En resumen, de
"una interpretación armónica, lógica jurídica de los
"artículos 363 del Código de Comercio, parte final y
"2397 del Código Civil para el Distrito Federal, de
"aplicación supletoria, es manifiesta la posibilidad
"de que las partes contratantes en negocios de
"naturaleza mercantil, puedan capitalizar intereses
"siempre y cuando éstos sean vencidos; y tal pacto
"por tanto no puede celebrarse de antemano bajo
"pena de nulidad".*

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo
Sexto Circuito, en la ejecutoria 136 del legajo, correspondiente al
amparo directo 1074/97, adujo:

*"Ahora bien, la posibilidad legal de capitalizar
"intereses atendiendo a la voluntad de los
"contratantes, no significa que se permita ese
"supuesto en la celebración de convenios en que
"anticipadamente se estipula esa capitalización,
"cuando los dichos intereses no se han aún
"generado, ya que el artículo 363 del Código de
"Comercio se refiere a intereses vencidos y no
"cubiertos que puedan por convenio capitalizarse,
"pero no autoriza a que se convenga su
"capitalización en forma anticipada, esto es cuando
"aún no se han vencido. Además, el artículo en
"último término citado debe entenderse en forma*

"congruente con el artículo 2397 del Código Civil Federal que previene, bajo pena de nulidad, que los contratantes no pueden convenir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses, dispositivo aplicable en forma supletoria, según lo autoriza el artículo 81, del Código de Comercio, además de que al permitir el artículo 363, del propio ordenamiento legal, la capitalización de intereses, lo hace, en vía de excepción, y, por ende, esta excepción debe aplicarse, o sea, única y exclusivamente para el caso de intereses 'vencidos'. Debiendo agregarse, que por tratarse de mero precedente aislado y no de jurisprudencia firme en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo; este Tribunal Colegiado no comparte el criterio en contrario, sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, identificado y transcrito por la quejosa."

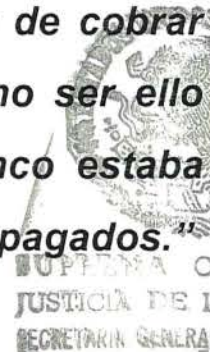
El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la ejecutoria 138 del legajo, dictada en el amparo directo 826/97, sostuvo:

"...lo que evidencia que efectivamente, respecto a las cantidades ejercidas del crédito adicional, para el pago de los intereses ordinarios, se convino su capitalización desde la celebración del contrato, porque como se advierte de la cláusula quinta, en



"la misma quedó pactado que lo pagado por los
"referidos intereses causarán intereses ordinarios
"sobre saldos insolutos en la siguiente forma..., lo
"que está prohibido por el artículo 363 del Código
"de Comercio, al establecer que los intereses
"vencidos y no pagados no devengarán intereses,
"pero que los contratantes podrán capitalizarlos, lo
"que implica que la norma aludida prohíbe que
"antes de que se generen no puede pactarse su
"capitalización, pues se refiere a intereses
"vencidos, corroborándose lo que establece el
"artículo de referencia con el contenido del artículo
"2397 del Código Civil del Distrito Federal, cuyo
"contenido es similar al 2293 del Código Civil del
"Estado de Chihuahua, al indicar que las partes no
"pueden, bajo pena de nulidad, convenir de
"antemano que los intereses se capitalicen y que
"produzcan intereses, por lo que si en el contrato
"se pactó así, ello es nulo, aun y cuando las partes
"lo hayan convenido en forma expresa, pues tal
"convenio fue ejecutado contra el tenor de una ley
"prohibitiva de orden público y de acuerdo con lo
"que establece el artículo 8° del Código Civil del
"Distrito Federal y el similar de este Estado, son
"nulos y por ello, es inaceptable que con solo
"pagar los intereses o dar el aviso con treinta días
"de anticipación de que no dispusieran del crédito
"adicional para tal efecto, sea suficiente para dejar

"sin efectos lo pactado respecto de la capitalización de intereses vencidos, ya que el crédito adicional sólo viene a constituir una forma de ocultar que los intereses van a generar intereses, argumentando que lo que se anexa al crédito inicial sólo es parte del dinero dispuesto del crédito adicional, utilizando para ello lo que denominan refinanciamiento de intereses, ya que ese actuar sólo constituye en realidad una simulación para estar en posibilidades de cobrar intereses sobre intereses, porque de no ser ello así y no los pagara el deudor, el banco estaba imposibilitado para cobrar sobre los no pagados."



A su vez, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, en la resolución 195 del legajo, relativa al amparo directo **295/98**, concluyó:

"Así las cosas, se puede deducir, como en su momento lo estimó la Alzada, que en la especie se actualiza el supuesto contemplado por el artículo 363 del Código de Comercio, en relación con el numeral 2397 del Código Civil Federal aplicado de manera supletoria, ya que en forma anticipada se introdujo al capital el monto de los intereses ordinarios que mensualmente habría de generar esa disposición adicional y sobre dicho capital habrían de pagarse nuevamente intereses."



Por otra parte, en contraposición a lo anterior, en las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados Primero, Tercero, Quinto y Noveno en Materia Civil del **Primer Circuito**, Segundo en Materia Civil del **Séptimo Circuito**, Segundo del **Décimo Primer Circuito** y Primero del **Décimo Sexto Circuito**, marcadas para su consulta con los números 5, 7 y 8; 15 y 18; 21, 22, 24 y 25; 53; 77 y 79; 91 y 93; y, 114, 117, 119, 121, 123, 126 y 127, en el legajo de ejecutorias, a que se hace mención en el resultando octavo del presente fallo; tales órganos jurisdiccionales sostuvieron, por diversos motivos, que para determinar la validez del contrato de apertura de crédito en el que se pacte desde un principio la capitalización de intereses, no es necesario acudir a la supletoriedad del artículo 2397 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.

En relación con tal postura, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la ejecutoria 5 del legajo, relativa al amparo directo **964/97**, sostuvo:

***"En este entendido, por ser un acto de comercio el
"contrato de apertura de crédito con garantía
"hipotecaria, debe regirse por las disposiciones del
"Código de Comercio y leyes colaterales a ella, sin
"que se dé la suplencia de la ley común cuando
"exista precepto aplicable al caso concreto.- - - Es
"verdad que como lo indica la sala responsable,***

"existe aplicación de la ley civil en tratándose de causas que rescindan o analicen los contratos, de conformidad con el artículo 81 del Código de Comercio, sin embargo, en el caso no se da la nulidad de las cláusulas que citan los actores en su demanda del juicio ordinario mercantil, ya que el Código de Comercio prevé las disposiciones relativas a la legalidad de las cláusulas cuya nulidad se reclama, al no darse el anatocismo por capitalización de intereses sobre intereses en relación al uso del crédito adicional... Lo anterior si bien está prohibido por el artículo 2397 del Código Civil, en relación a que las partes no pueden bajo pena de nulidad convenir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses, como ya se dijo, no es aplicable al caso en estudio, ya que la aplicación de la ley común se establece cuando no existe precepto aplicable y en el caso, se ha visto, existe la disposición perfectamente aplicable en el caso concreto..."

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la ejecutoria 15 del legajo, correspondiente al amparo directo **6663/97**, resolvió lo siguiente:

"En ese entendido, por ser un acto de comercio el contrato de apertura de crédito con garantía



"hipotecaria y sistema de refinanciamiento, debe
 "regirse por las disposiciones del Código de
 "Comercio y leyes colaterales a ella. Es cierto que
 "existe prohibición en el artículo 2397, del Código
 "Civil, en relación a que las partes no pueden, bajo
 "pena de nulidad convenir de antemano que los
 "intereses se capitalicen y que produzcan
 "intereses; sin embargo ese precepto, no es
 "aplicable al caso en estudio, ya que la suplencia
 "de la ley común se establece cuando de existir la
 "figura jurídica aplicable, ésta no es regulada de
 "manera suficiente por la ley de la materia
 "debiéndose acudir a la legislación local, lo que no
 "sucede en el caso..."

A su vez, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del
 Primer Circuito, al resolver el amparo directo 1350/98,
 identificado como ejecutoria 25 en el correspondiente legajo,
 llegó a la siguiente conclusión:

"En otro orden de ideas, debe decirse que tampoco
 "les asiste la razón a los quejosos cuando
 "manifiestan (sexto concepto de violación) que la
 "sala responsable violó en su perjuicio el artículo
 "2397 del Código Civil, que prohíbe el anatocismo,
 "en virtud de que el precepto citado es inaplicable
 "a la relación jurídica que une a las partes en
 "controversia, ya que si se considera que las

***"partes celebraron un contrato de apertura de
"crédito, que se encuentra regulado por lo que
"dispone la Ley General de Títulos y Operaciones
"de Crédito, siendo por tanto un contrato de
"naturaleza mercantil..."***

En el mismo sentido, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la ejecutoria 53 del legajo, correspondiente a la dictada en el amparo directo **3209/98**, sostuvo:

***"Ahora bien, aun cuando los dictámenes contables
emitidos por el perito de la actora y el perito
"tercero en discordia, coinciden en determinar que
"en el caso existió capitalización de intereses y
"lesión civil; sin embargo, por una parte, de la
"cláusula quinta del contrato base no se advierte
"que exista capitalización de intereses y, por otra,
"no se está en el caso de un contrato celebrado
"entre particulares, sino de un contrato efectuado
"entre particulares con una institución de crédito,
"por lo que no tiene aplicación lo dispuesto por el
"artículo 2395 del Código Civil..."***

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo **306/97**, identificado como ejecutoria 77 del legajo respectivo, argumentó:



"Ineficaz resulta lo que se aduce respecto de la
 "prohibición que existe en el Código Civil del
 "Distrito Federal y el del Estado de Veracruz, cuyos
 "artículos refiere en sus motivos de inconformidad,
 "que prohíben la capitalización de intereses para
 "que produzcan intereses, pues a más de que los
 "ordenamientos señalados, en el caso, no
 "encuentran apoyo en el Código de Comercio por
 "existir norma expresa similar en éste; debe
 "decirse que el artículo 363 del Código de
 "Comercio establece: --- 'Los intereses vencidos y
 "no pagados no devengarán intereses. Los
 "contratantes podrán, sin embargo,
 "capitalizarlos'...".

En condiciones análogas, el Segundo Tribunal Colegiado
 del Décimo Primer Circuito, en la ejecutoria 91 del legajo,
 correspondiente a la emitida en el amparo directo 73/98,
 concluyó:

"Carecen de razón los ahora quejosos Jaime
 "Zamora Sánchez y Georgina Plaza Córdoba de
 "Zamora, cuando argumentan en el primero de
 "esos motivos de inconformidad que
 "equivocadamente la responsable señaló en la
 "sentencia reclamada que no opera la
 "supletoriedad del artículo 2398 del Código Civil

"para el Distrito Federal, en virtud de que dicha
 "supletoriedad únicamente opera cuando existe
 "alguna laguna en el Código de Comercio y no es el
 "caso, ya que para que tal efecto el artículo 363 del
 "Código de Comercio tiene una disposición
 "expresa que prohíbe que los intereses vencidos
 "generen a su vez intereses; porque -aducen los
 "impetrantes-, la supletoriedad también opera
 "cuando sus disposiciones requieren
 "interpretación, como en la especie lo es el citado
 "numeral 363, dado que '...la interpretación se
 "ocupa para decidir si los contratantes podrán
 "pactar la capitalización aun cuando no se hayan
 "vencido los intereses o sólo cuando dichos
 "intereses ya se hayan devengado o vencido',
 "habida cuenta que efectivamente en la especie no
 "procede la pretendida supletoriedad del artículo
 "2397 del Código Civil invocado, al diverso 363 del
 "enjuiciamiento mercantil, porque, además de que
 "este ordenamiento jurídico contempla disposición
 "sobre prohibir que los intereses vencidos generen
 "a su vez intereses y acerca de que los
 "contratantes podrán, sin embargo,
 "capitalizarlos...".

Por último, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto
 Circuito sostuvo, al resolver el amparo directo 742/97, que quedó
 identificado como ejecutoria 123 del legajo, lo siguiente:



"En ese sentido, por ser un acto de comercio el
"contrato de apertura de crédito con garantía
"hipotecaria, debe regirse por las disposiciones del
"Código de Comercio y leyes colaterales a ella, sin
"que se dé la suplencia de la ley común, cuando
"exista precepto aplicable al caso concreto, lo que
"no acontece en el particular, como se razona a
"continuación.- - - Es verdad que como lo indica el
"magistrado resolutor, existe aplicación de la ley
"civil federal, en tratándose de causas que
"rescinden o invaliden los contratos, de
"conformidad con el artículo 81 del Código de
"Comercio, sin embargo, en el caso no se da la
"nulidad de la cláusula tercera del contrato que se
"impugna, que cita el actor en su demanda del
"juicio ordinario mercantil, ya que el Código de
"Comercio prevé las disposiciones relativas a la
"legalidad de dicha cláusula cuya nulidad se
"reclama, al no darse el anatocismo por
"capitalización de intereses sobre intereses, en
"relación con el uso del crédito adicional y mucho
"menos, de que se trate de un acto jurídico
"simulado, como erróneamente lo sostuvo el
"tribunal de alzada, en la sentencia que se
"reclama.- - - Lo anterior, si bien está prohibido por
"el artículo 2397 del Código Civil para el Distrito
"Federal en Materia del Fuero Común y para toda la

***"República en Materia Federal, en relación a que
"las partes no pueden bajo pena de nulidad,
"convenir de antemano que los intereses se
"capitalicen y que produzcan intereses, como ya se
"dijo, no es aplicable al caso en estudio, ya que la
"aplicación de la ley común se establece, cuando
"no existe precepto aplicable y en el caso, se ha
"visto, existe la disposición perfectamente
"aplicable en el caso concreto..."***

Como se advierte de lo anterior y tal como se anunció, en relación con un contrato de apertura de crédito, en el que se pactó con anticipación la capitalización de intereses, hipótesis en la que coincidieron todos los Tribunales que entraron en contradicción al interpretar los contratos respectivos que dieron lugar a los juicios que resolvieron, el primer punto de contradicción a dilucidar por este Tribunal Pleno consiste en determinar si dicho contrato se encuentra plenamente regulado en los artículos de 291 al 301 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, o si la reglamentación especial del referido contrato resulta incompleta y debe suplirse.

En ese contexto debe partirse por señalar que el establecimiento y la regulación del contrato de apertura de crédito aconteció en el orden jurídico nacional al entrar en vigor la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de agosto de mil novecientos treinta y dos, expedida por el Presidente de la



República, en uso de facultades extraordinarias, disponiéndose lo conducente en sus artículos del 291 al 301, los cuales, a la fecha, son del tenor siguiente:

**"Artículo 291.- En virtud de la apertura de crédito,
"el acreditante se obliga a poner una suma de
"dinero a disposición del acreditado, o a contraer
"por cuenta de éste una obligación, para que el
"mismo haga uso del crédito concedido en la forma
"y en los términos y condiciones convenidos,
"quedando obligado el acreditado a restituir al
"acreditante las sumas de que disponga, o a
"cubrirlo oportunamente por el importe de la
"obligación que contrajo, y en todo caso a pagarle
"los intereses, prestaciones, gastos y comisiones
"que se estipulen.**

**"Artículo 292.- Si las partes fijaron límite al importe
"del crédito, se entenderá, salvo pacto en contrario,
"que en el quedan comprendidos los intereses,
"comisiones y gastos que deba cubrir el
"acreditado.**

**"Artículo 293.- Si en el contrato no se señala un
"límite a las disposiciones del acreditado, y
"tampoco es posible determinar el importe del
"crédito por el objeto a que se destina, o de algún
"otro medio convenido por las partes, se entenderá**

**"que el acreditante está facultado para fijar ese
"límite en cualquier tiempo.**

**"Artículo 294.- Aun cuando en el contrato se hayan
"fijado el importe del crédito y el plazo en que tiene
"derecho a hacer uso de él el acreditado, pueden
"las partes convenir en que cualquiera, o una sola
"de ellas estará facultada para restringir el uno o el
"otro, o ambos a la vez, o para denunciar el
"contrato a partir de una fecha determinada o en
"cualquier tiempo, mediante aviso dado a la otra
"parte en la forma prevista en el contrato, o a falta
"de ésta, por ante notario o corredor, y en su
"defecto, por conducto de la primera autoridad
"política del lugar de su residencia, siendo
"aplicables al acto respectivo los párrafos tercero y
"cuarto del artículo 143.**

**"Cuando no se estipule término, se entenderá que
"cualquiera de las partes puede dar por concluído
"el contrato en todo tiempo, notificándolo así a la
"otra como queda dicho respecto del aviso a que
"se refiere el párrafo anterior.**

**"Denunciado el contrato o notificada su
"terminación de acuerdo con lo que antecede, se
"extinguirá el crédito en la parte de que no hubiere
"hecho uso el acreditado hasta el momento de**

CONTRADICCION DE TESIS 31/98.



"esos actos; pero a no ser que otra cosa se
"estipule, no quedará liberado el crédito de pagar
"los premios, comisiones y gastos
"correspondientes a las sumas de que no hubiere
"dispuesto, sino cuando la denuncia o la
"notificación dichas procedan del acreditante.

"Artículo 295.- Salvo convenio en contrario, el
"acreditado puede disponer a la vista de la suma
"objeto del contrato.

"Artículo 296.- La apertura de crédito en cuenta
"corriente da derecho al acreditado a hacer
"remesas, antes de la fecha fijada para la
"liquidación, en reembolso parcial o total de las
"disposiciones que previamente hubiere hecho,
"quedando facultado, mientras el contrato no
"concluya, para disponer en la forma pactada del
"saldo que resulte a su favor.

"Son aplicables a la apertura del crédito en cuenta
"corriente, en lo que haya lugar, los artículos 306,
"308 y 309.

"Artículo 297.- Salvo convenio en contrario,
"siempre que en virtud de una apertura de crédito
"el acreditante se obligue a aceptar u otorgar
"letras, a subscribir pagarés, a prestar su aval o en

*"general a aparecer como endosante o signatario
"de un título de crédito, por cuenta del acreditado,
"éste quedará obligado a constituir en poder del
"acreditante la provisión de fondos suficiente, a
"más tardar el día hábil anterior a la fecha en que el
"documento aceptado, otorgado o suscrito deba
"hacerse efectivo.*

*"La aceptación, el endoso, el aval o la suscripción
"del documento, así como la ejecución del acto de
"que resulte la obligación que contraiga el
"acreditante por cuenta del acreditado, deba éste o
"no constituir la provisión de que antes se habla,
"disminuirán desde luego el saldo del crédito, a
"menos que otra cosa se estipule; pero, aparte de
"los gastos, comisiones, premios y demás
"prestaciones que se causen por el uso del crédito,
"de acuerdo con el contrato, el acreditado sólo
"estará obligado a devolver las cantidades que
"realmente supla el acreditante al pagar las
"obligaciones que así hubiere contraído, y a
"cubrirle únicamente los intereses que
"correspondan a tales sumas.*

*"Artículo 298.- La apertura de crédito simple o en
"cuenta corriente, puede ser pactada con garantía
"personal o real. La garantía se entenderá
"extendida, salvo pacto en contrario, a las*



"cantidades de que el acreditado haga uso dentro
"de los límites del crédito.

"Artículo 299.- El otorgamiento o transmisión de un
"título de crédito o de cualquier otro documento
"por el acreditado al acreditante, como
"reconocimiento del adeudo que a cargo de aquél
"resulte en virtud de las disposiciones que haga
"del crédito concedido, no facultan al acreditante
"para descontar o ceder el crédito así
"documentado, antes de su vencimiento, sino
"hasta cuando el acreditado lo autorice a ello
"expresamente.

OFICINA
A NACIÓN
DE ACUERDOS

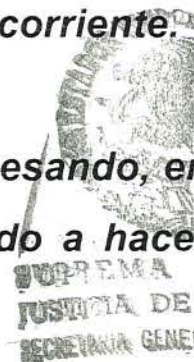
"Negociado o cedido el crédito por el acreditante,
"éste abonará al acreditado, desde la fecha de tales
"actos, los intereses correspondientes al importe
"de la disposición de que dicho crédito proceda,
"conforme al tipo estipulado en la apertura de
"crédito; pero el crédito concedido no se entenderá
"renovado por esa cantidad, sino cuando las partes
"así lo hayan convenido.

"Artículo 300.- Cuando las partes no fijen plazo
"para la devolución de las sumas de que puede
"disponer el acreditado, o para que el mismo
"reintegre las que por cuenta suya pague el
"acreditante de acuerdo con el contrato, se

*"entenderá que la restitución debe hacerse al
"expirar el término señalado para el uso del crédito,
"o en su defecto, dentro del mes que siga a la
"extinción de este último.*

*"La misma regla se seguirá acerca de los premios,
"comisiones, gastos y demás prestaciones que
"corresponda pagar al acreditado, así como
"respecto al saldo que a cargo de éste resulte al
"extinguirse el crédito abierto en cuenta corriente.*

*"Artículo 301.- El crédito se extinguirá, cesando, en
"consecuencia, el derecho del acreditado a hacer
"uso de él en lo futuro:*



*"I.- Por haber dispuesto el acreditado de la
"totalidad de su importe, a menos que el crédito se
"haya abierto en cuenta corriente;*

*"II.- Por la expiración del término convenido, o por
"la notificación de haberse dado por concluído el
"contrato, conforme al artículo 294, cuando no se
"hubiere fijado plazo;*

*"III.- Por la denuncia que del contrato se haga en
"los términos del citado artículo;*



**"IV.- Por la falta o disminución de las garantías
"pactadas a cargo del acreditado, ocurridas con
"posterioridad al contrato, a menos que el
"acreditado suplemente o substituya debidamente
"la garantía en el término convenido al efecto;**

**"V.- Por hallarse cualquiera de las partes en estado
"de suspensión de pagos, de liquidación judicial o
"de quiebra;**

**"VI.- Por la muerte, interdicción, inhabilitación o
"ausencia del acreditado, o por disolución de la
"sociedad a cuyo favor se hubiere concedido
"crédito".**

Además, conviene desde ahora dejar precisado que la apertura de crédito es un contrato mercantil, máxime cuando en él participa una institución de crédito; hipótesis en la que tiene la característica de ser un contrato bancario, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1° de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 75, fracción XIV, del Código de Comercio, los que disponen:

**"Artículo 1° ... Las operaciones de crédito que esta
"ley reglamenta son actos de comercio.**

**"Artículo 75. La ley reputa actos de comercio:
"XIV. Las operaciones de bancos".**

Con base en tal contexto legal, el contrato de apertura de crédito debe entenderse como un acto de comercio celebrado entre acreditante y acreditado, por virtud del cual el primero se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado, o a contraer por cuenta de éste una obligación, para que el mismo haga uso del crédito concedido en la forma y en los términos y condiciones convenidos, quedando obligado el acreditado a restituir al acreditante las sumas de que disponga, o a cubrirlo por el importe de la obligación que contrajo, y en todo caso a pagarle los intereses, prestaciones, gastos y comisiones que estipulen.

Por ello, sus elementos son los siguientes:



a) El consentimiento de las partes respecto del contenido del acto jurídico; y

b) El objeto, que consiste en poner a disposición del acreditado una cantidad de dinero o asumir por cuenta de éste obligaciones a cambio de una prestación a su cargo, que se traduce en restituir la cantidad que se dispuso o en pagar la obligación que el acreditante contrató a su cuenta, y en el pago de los intereses, los gastos y las comisiones que se hubieren pactado.

Entre las principales características del contrato, destacan:

CONTRADICCION DE TESIS 31/98.



a) Es un contrato principal, nominado y autónomo, por cuanto tiene características propias que lo dotan de individualidad.

b) Los sujetos que conforman la relación son el acreditado y el acreditante.

c) El objeto del contrato es la disponibilidad de los recursos, con independencia de que el acreditado ejerza o no el crédito.

d) Las obligaciones del acreditante son, alternativa o conjuntamente, poner a disposición del acreditado una suma de dinero y, contraer obligaciones por cuenta de éste. A su vez, las obligaciones del acreditado son, según el caso, restituir las sumas de que disponga o responder ante el acreditado de las obligaciones cubiertas por su cuenta y, pagar los intereses sobre las disposiciones ejercidas, prestaciones, gastos y comisiones pactadas.

e) Es un contrato consensual porque se perfecciona con el simple acuerdo de voluntades.

f) Puede considerarse como de dinero o de firma, lo primero cuando el acreditante se obliga a poner a disposición del acreditado una suma de dinero en efectivo, para que éste disponga, si así lo desea, en los términos y condiciones pactados; mientras que sólo será de firma cuando el acreditante ponga a disposición del acreditado su propia capacidad para

contraer ciertas obligaciones por cuenta de éste, hasta por el límite pactado.

g) Es bilateral, porque las partes se obligan recíprocamente; el acreditante, a poner de inmediato a disposición del acreditado los recursos del crédito o a contraer ciertas obligaciones por cuenta de éste; y, a su vez, el acreditado tiene por obligaciones pagar una comisión o gastos por apertura -si eso se hubiera pactado- restituir el monto de las sumas de que dispuso o, en su caso, responder ante el acreditante por las obligaciones que éste asumió por su cuenta, así como el pago de intereses, prestaciones, gastos y comisiones que se estipulen.

h) Por la forma de disposición puede ser simple o en cuenta corriente, también conocida como cuenta revolvente. Será simple cuando el crédito se agota por la disposición que de él haga el acreditado, y cualquier cantidad que entregue al acreditante se entenderá como abono al saldo insoluto, estando imposibilitado para volver a disponer de él aunque no hubiese vencido el plazo pactado para ello; en cambio, se tratará de cuenta corriente, cuando el acreditado pueda retirar y pagar parcial o totalmente los recursos del crédito las veces que le convenga, siempre que no rebase el monto y plazo convenidos.

Sentados los elementos y las características esenciales del contrato de apertura de crédito, con el fin de llegar a una conclusión sobre la validez de la capitalización de intereses que se haya pactado en los contratos de tal naturaleza, de acuerdo

**CONTRADICCION DE TESIS 31/98.**

con la hipótesis de que partieron los Tribunales Colegiados de Circuito que entraron en contradicción, es necesario precisar las diferencias substanciales que permiten distinguirlo respecto del préstamo mercantil y del mutuo civil.

Si bien el contrato de apertura de crédito se asimila al contrato de préstamo o mutuo con interés, no obstante ello, tiene una naturaleza jurídica propia y distinta que lo hace singular.

El artículo 358 del Código de Comercio dispone:

"Artículo 358.- Se reputa mercantil el préstamo cuando se contrae en el concepto y con expresión de que las cosas prestadas se destinen a actos de comercio y no para necesidades ajenas a éste. Se presume mercantil el préstamo que se contrae entre comerciantes."

Las diferencias substanciales entre el préstamo mercantil y el contrato de apertura de crédito son las siguientes:

a) Mientras que en el primero el objeto del préstamo debe dedicarse a actos mercantiles, en el segundo, el dinero -objeto del contrato- puede tener cualquier destino o aplicación.

b) En el préstamo mercantil el carácter mercantil de dicho acto jurídico viene como consecuencia del destino o uso que se vaya a dar a la cosa prestada, o sea, por un acto volitivo,

mientras que en el contrato de apertura de crédito el carácter absolutamente mercantil del mismo deviene de disposición expresa de la ley, independientemente del destino o aplicación de esos recursos.

c) El préstamo mercantil puede tener por objeto cualquier cosa que esté en el comercio, mientras que el contrato de apertura de crédito se limita únicamente a poner a disposición del acreditado una suma de dinero o a realizar ciertas obligaciones por cuenta de éste.

d) En el préstamo mercantil, aun cuando la entrega de la cosa prestada no es requisito de existencia ni de validez del contrato, se presupone una transferencia de propiedad como consecuencia inmediata y natural del propio contrato; el objeto prestado nunca se entrega, el contrato podría concluir; en cambio, en el contrato de apertura de crédito, la consecuencia inmediata y natural de su celebración es la disponibilidad de recursos y no forzosamente su entrega, puede nunca transferirse al acreditado la propiedad de los recursos sin que ello implique la terminación del contrato, si bien lo esperado es que el acreditado disponga de los mismos.

Por otra parte, la distinción radical entre el contrato de apertura de crédito y el mutuo civil deriva de la propia regulación de este último, prevista en el artículo 2384 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, el que dispone:



***“Artículo 2384.- El mutuo es un contrato por el cual
"el mutuante se obliga a transferir la propiedad de
"una suma de dinero o de otras cosas fungibles al
"mutuatario, quien se obliga a devolver otro tanto
"de la misma especie y calidad”.***

Al tenor de lo dispuesto en este último precepto, el mutuo civil se distingue del contrato de apertura de crédito, entre otras características, porque:

a) El mutuo puede versar sobre dinero o cualquier objeto fungible, mientras que en el contrato de apertura de crédito lo que se pone a disposición del acreditado siempre es una suma de dinero, sin desconocer que en el caso del crédito documentado el acreditante se obliga a asumir obligaciones por parte del acreditado;

b) En el mutuo, el mutuante se obliga a transferir la propiedad del objeto del contrato, en tanto que en el contrato de apertura de crédito la obligación del acreditante es mantener disponibles los recursos a favor del acreditado ;

c) El mutuo es generalmente gratuito, mientras que el contrato de apertura de crédito es oneroso.

Las diferencias apuntadas facilitan la comprensión de la singularidad del contrato de apertura de crédito y de la naturaleza diversa de cada una de las convenciones referidas.

En conclusión, el contrato de apertura de crédito es especial, autónomo, definitivo y de contenido complejo, distinto del préstamo mercantil y del mutuo civil.

El legislador ha dado a cada uno de los contratos analizados un estatuto jurídico distinto; así, al regular el mutuo en el Código Civil otorga al mutuuario los beneficios establecidos en dicho ordenamiento en favor de las clases menos favorecidas. En cambio, el préstamo mercantil lo prevé en el ordenamiento que por excelencia rige al comercio; y al contrato de apertura de crédito, por sus características especiales, lo establece la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que precisamente tiene por objeto regular las operaciones concernientes al crédito.

La conclusión anterior, relativa a que la incorporación al orden jurídico nacional del contrato de apertura de crédito buscó, en todo momento, regular en forma específica, atendiendo a su naturaleza y fines propios, operaciones de diversa entidad, se ve fortalecida, inclusive, por las declaraciones del Secretario de Hacienda y Crédito Público sobre la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que hicieron las veces de exposición de motivos de dicha ley, en las que señaló:



"Al lado del préstamo directo y del descuento
"ordinario; al lado del mutuo con garantía
"prendaria y de la hipoteca directa constituida en
"favor de acreedor determinado; al lado de las
"ventas condicionales de títulos o valores y de las
"ventas con transferencia material de los bienes
"vendidos, la nueva ley abre la posibilidad de
"contratos de crédito consensuales que no
"requieren, por tanto, la transferencia material e
"inmediata de las sumas prestadas; las ventas de
"bienes muebles que se operan mediante la simple
"entrega del título representativo sin implicar la
"traslación y el manejo material de los bienes
"vendidos; las prendas que válidamente se
"constituyen por una inscripción en el registro, por
"la entrega de un título o por el transferimiento
"jurídico de la posesión sin necesidad de
"apoderamiento material de los bienes dados en
"prenda y el descuento de créditos en libros, que
"tampoco requiere la entrega de los títulos
"representativos, sino que se cumple por medio de
"una mera construcción jurídica de
"responsabilidades y que en un país como el
"nuestro, donde la circulación de títulos de crédito
"ha sido casi nula, está destinado a ser el origen de
"esa circulación y a cumplir el propósito
"pedagógico de formar un mercado de descuento.

"La nueva ley precisa la distinción entre apertura de crédito, crédito en cuenta corriente, y cuenta corriente, resolviendo con ello puntos que han dado lugar a largas controversias y abriendo un inmenso campo para operaciones que la falta de prescripciones legislativas y la obscuridad de conceptos existente sobre el particular habían hecho imposibles en México, no obstante las notorias ventajas que de su realización pueden derivarse."

De lo expuesto resulta que al establecerse la regulación del contrato de apertura de crédito en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito se atendió a la necesidad social de contar con un marco jurídico preciso que permita la celebración de operaciones de crédito al tenor de disposiciones que otorguen a los agentes económicos la debida seguridad jurídica.

En efecto, a través de la regulación que sobre el contrato de apertura de crédito estableció el legislador, se instauró un régimen jurídico de naturaleza diversa al que ya existía para la celebración de contratos cuyo objeto esencial consistía en el préstamo, que ya contaban con su propio marco jurídico, dentro del cual se atiende a las finalidades específicas que en cada caso el legislador consideró específicamente, dependiendo de las cualidades propias de los celebrantes del acuerdo de voluntades o de la finalidad a la que se fuere a destinar el bien objeto de la convención.



Por ello, válidamente puede sostenerse que en la regulación prevista en los artículos del 291 al 301 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el legislador creó un nuevo contrato, independiente de otros, por lo cual estableció en tales preceptos todas y cada una de las características que integran su esencia, atendiendo, por supuesto, a finalidades muy diversas de las que en su momento llevaron a instituir las disposiciones que prevén los contratos de préstamo mercantil y de mutuo civil.

La autonomía e independencia jurídica del contrato de apertura de crédito es patente, pues en los referidos preceptos el legislador dispuso todo lo que estimó pertinente acerca del mismo; así, en el artículo 291 se define el contrato; en el 292 se habla del caso en que se establezca límite máximo del crédito; en el 293 regula el supuesto de que no se fije importe máximo de disposición; en el 294 se reglamenta la hipótesis de que las partes podrán convenir en restringir el plazo o el monto del crédito concedido; en el 295 se establece que el acreditado podrá disponer a la vista, salvo convenio en contrario, de la suma objeto del contrato; en el 296 aborda la mecánica de las disposiciones y abonos en cuenta corriente; el 297 está destinado a establecer las reglas de pago por parte del acreditado cuando el crédito estribe en la aceptación de obligaciones a su nombre por parte del acreditante; el 298 tiene por objeto precisar que en la apertura se puede pactar el otorgamiento de garantías personales y reales y que se entenderá que es por el monto del crédito ejercido; el 299 impide al acreditante negociar, previamente a su vencimiento

y sin consentimiento del acreditado, los documentos que éste hubiere dejado en garantía; el numeral 300 preceptúa las reglas a seguir para la disposición y el pago del crédito y, el 301 enlista las causas de extinción del crédito.

De especial relevancia resulta que en el artículo 291 antes citado, se faculte a las partes para que estipulen el pago de intereses en los términos que estimen convenientes; es decir, el legislador dispuso expresamente que en esta convención mercantil sus celebrantes no tienen restricción alguna para pactar, a su libre arbitrio, cualquier cuestión relacionada con los intereses que se generen como consecuencia de las disposiciones monetarias que lleguen a realizar y que retribuirán al acreditante por el menoscabo patrimonial que sufra por la imposibilidad de destinar tales recursos a otros fines.

Como se observa, en el mutuo civil el legislador, en aras de tutelar a las partes, restringió en forma absoluta su facultad para acordar de antemano que los intereses se capitalizaran para producir intereses, pues aun en la hipótesis de que el mutuuario la consintiera, la convención relativa sería nula de pleno derecho; en el préstamo mercantil, esta restricción existe en forma relativa, pues si las partes pactan tal capitalización expresamente, sí será válida; en cambio, para el contrato de apertura de crédito tuvo la intención de dejar a la libre voluntad de las partes la fijación de todo lo relativo a los intereses que se generaran, sin restringir en forma alguna la capitalización de intereses; debiendo aclararse que tratándose de las operaciones de apertura de crédito que



celebren los acreditados con instituciones de banca múltiple la protección que, en su caso, se establezca será por vía administrativa, como más adelante se verá, mediante disposiciones emitidas por el Banco de México.

Lo anterior, no obstante que conforme a lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, las operaciones de crédito se regirán, inclusive, por las fuentes jurídicas ahí señaladas, a saber:

**"I.- Por lo dispuesto en esta ley y en las demás
"leyes especiales relativas; en su defecto;**

**"II.- Por la legislación mercantil general; en su
"defecto;**

**"III.- Por los usos bancarios y mercantiles y, en
"defecto de estos;**

**"IV.- Por el derecho común, declarándose aplicable
"en toda la República, para los fines de esta ley el
"Código Civil del Distrito Federal".**

De la lectura de este precepto deriva que la supletoriedad sólo se autoriza para el caso de "defecto" de la ley que se debe aplicar con preferencia.

De ello se sigue que, en relación con la capitalización de intereses que en su caso pactaren las partes dentro de un contrato de apertura de crédito, no puede aplicarse supletoriamente lo previsto en el artículo 2397 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, el cual prohíbe expresamente que de antemano se convenga la capitalización de intereses. Dicho precepto dispone:

“Artículo 2397.- Las partes no pueden bajo pena de nulidad convenir de antemano que los intereses se capitalicen y produzcan intereses.”



La tutela de las partes que este numeral establece no encuentra justificación jurídica para ser aplicada en forma supletoria a la normatividad que rige al contrato de apertura de crédito, pues como se ha visto se trata de un contrato cuya naturaleza es totalmente diversa, que fue creado por el legislador para regular convenciones en donde las partes acuden en circunstancias dispares a las que se presentan cuando concurren a un contrato de apertura de crédito.

La aplicación supletoria del referido precepto del Código Civil, sería contradictoria a la intención del legislador y a los principios que rigen la operancia de tal figura, pues aunado a que se trata de convenciones radicalmente diferentes, es de explorado derecho que la supletoriedad de una legislación a otra

CONTRADICCION DE TESIS 31/98.



no puede tener lugar cuando a través de ello se adoptarían hipótesis prohibitivas o tutelares, de excepción, que únicamente pueden regir a los actos realizados al tenor del ordenamiento en que se prevén.

Así, la supresión del legislador en la regulación del contrato de apertura de crédito, relativo a las restricciones que en otros ordenamientos estableció para pactar la capitalización de intereses no significa, en manera alguna, un defecto legislativo, por el contrario, es un elemento que genera plena convicción de que con ello la celebración de tal convenio se dejó a la voluntad de las partes.

Además, debe tenerse presente que al regularse las cuestiones sustantivas de un determinado contrato, la supresión de normas prohibitivas o tutelares, como lo son aquéllas que restringen la celebración de un pacto de capitalización de intereses, que rigen para contratos de naturaleza diversa, no necesita realizarse de manera expresa, a diferencia de su establecimiento, que sí requiere ser previsto en forma literal y precisa, como lo hizo el legislador en los artículos 363 del Código de Comercio y 2397 del Código Civil de aplicación federal.

Ahora bien, dado que en las resoluciones dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron lugar a la presente contradicción, fungió como acreditante una institución de banca múltiple, debe precisarse que en tal hipótesis, en relación con la capitalización de intereses que se pacte por las partes, cobran

aplicación directa y paralela diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, en su carácter de norma especial.

Al efecto destaca que las instituciones de banca múltiple constituyen personas jurídicas colectivas que prestan el servicio de banca y crédito sujetas a la autorización que les otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a las disposiciones legales y administrativas que regulen sus actividades.

Normatividad toda ésta que viene a conformar el derecho bancario, rama autónoma y especial, derivada del derecho mercantil, cuyo establecimiento se encuentra reservado al Congreso de la Unión, pues a éste corresponde en exclusiva legislar en materia de intermediación y servicios financieros, conforme a la fracción X del artículo 73 constitucional, y que se caracteriza por encontrarse imbuida, por una parte, de los principios que rigen a la materia mercantil, que buscan fomentar los procesos productivos y comerciales mediante una adecuada intermediación financiera y, por otra, de los propios que distinguen a la regulación de carácter administrativo, cuya finalidad esencial radica en tutelar el interés público.

Así, entre la regulación que forma parte del referido derecho bancario, a la que deben someterse las instituciones de banca múltiple destaca, además de lo dispuesto en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, lo previsto en diversos preceptos de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley del



Banco de México, reglamentaria de los párrafos sexto y séptimo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los cuales se otorgan facultades al Banco Central para emitir disposiciones que incidan sobre las tasas de interés u otros conceptos análogos y demás características de las operaciones activas que realicen aquellas instituciones.

Entre los preceptos que en la especie resultan aplicables, destacan los artículos 6°, párrafo primero y 48, párrafo primero de la Ley de Instituciones de Crédito y, 24 y 26 de la Ley del Banco de México, que establecen:

**"Artículo 6°.- En lo no previsto por la presente Ley
y por la Ley Orgánica del Banco de México, a
las instituciones de banca múltiple se les
aplicarán en el orden siguiente:**

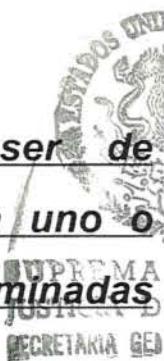
"...

**"Artículo 48.- Las tasas de interés, comisiones,
premios, descuentos, u otros conceptos análogos,
montos, plazos y demás características de las
operaciones activas, pasivas, y de servicios, así
como las operaciones con oro, plata y divisas que
realicen las instituciones de crédito y la inversión
obligatoria de su pasivo exigible, se sujetarán a lo
dispuesto en la Ley Orgánica del Banco de**

"México, con el propósito de atender necesidades
"de regulación monetaria y crediticia.

"Artículo 24.- El Banco de México podrá expedir
"disposiciones sólo cuando tengan por propósito
"la regulación monetaria o cambiaria, el sano
"desarrollo del sistema financiero, el buen
"funcionamiento del sistema de pagos, o bien, la
"protección de los intereses del público. Al expedir
"sus disposiciones el Banco deberá expresar las
"razones que las motivan.

"Las citadas disposiciones deberán ser de
"aplicación general, pudiendo referirse a uno o
"varios tipos de intermediarios, a determinadas
"operaciones o a ciertas zonas o plazas.



"Las sanciones que el Banco imponga conforme a
"lo previsto en los artículos 27, 29 y 33, deberán
"tener como objetivo preservar la efectividad de las
"normas de orden público establecidas en la
"presente Ley y, de esta manera, proveer a los
"propósitos mencionados en el primer párrafo de
"este precepto.

"Artículo 26.- Las características de las
"operaciones activas, pasivas y de servicios que
"realicen las instituciones de crédito, así como las



"de crédito, préstamo o reporto que celebren los intermediarios bursátiles, se ajustarán a las disposiciones que expida el Banco Central."

"Lo dispuesto en este artículo será aplicable también a los fideicomisos, mandatos o comisiones de los intermediarios bursátiles y de las instituciones de seguros y de fianzas."

De ahí, que conforme a tales numerales el Banco de México puede expedir disposiciones generales que incidan sobre las operaciones activas de las instituciones de crédito las que, en su caso, podrán referirse a la capitalización de intereses que se pacte en un contrato de apertura de crédito.

Todo lo expuesto pone de manifiesto que las normas legales especiales que regulan el contrato de apertura de crédito no adolecen de deficiencia alguna sobre el punto de que se trata, motivo por el cual no debe aplicarse supletoriamente disposición normativa alguna respecto a la capitalización de intereses.

En tal virtud, debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia la tesis, cuyo rubro y texto es del siguiente tenor:

"CAPITALIZACIÓN DE INTERESES. EL ARTÍCULO 2397 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL, NO ES

**"APLICABLE SUPLETORIAMENTE AL CONTRATO
 "DE APERTURA DE CRÉDITO. Las declaraciones
 "del Secretario de Hacienda y Crédito Público
 "sobre la Ley General de Títulos y Operaciones de
 "Crédito, publicada en el Diario Oficial de la
 "Federación el veintisiete de agosto de mil
 "novecientos treinta y dos, que hacen las veces de
 "exposición de motivos de tal ordenamiento, son
 "categóricas en cuanto al propósito de establecer
 "contratos de crédito consensuales, distintos del
 "préstamo y de otras convenciones tradicionales,
 "para abrir un amplio campo de operaciones que la
 "falta de prescripciones legislativas habían hecho
 "imposible en México. A esa clara intención
 "responde la figura jurídica denominada **apertura**
 "de crédito, regulada por los artículos del 291 al
 "301 de la ley indicada, de los cuales el legislador
 "dispuso todo lo que estimó pertinente acerca de
 "ese contrato; así, en el artículo 291 se define el
 "contrato; en el 292 se regula la hipótesis en que se
 "establezca un límite máximo del crédito; en el 293
 "regula el supuesto de que no se fije importe
 "máximo de disposición; en el 294 se reglamenta la
 "hipótesis de que las partes podrán convenir en
 "restringir el plazo o el monto del crédito
 "concedido; en el 295 se establece que el
 "acreditado podrá disponer a la vista, salvo
 "convenio en contrario, de la suma objeto del**



"contrato; en el 296 aborda la mecánica de las
"disposiciones y abonos en cuenta corriente; el
"297 está destinado a establecer las reglas de pago
"por parte del acreditado cuando el crédito estribe
"en la aceptación de obligaciones a su nombre por
"parte del acreditante; el 298 tiene por objeto
"precisar que en la apertura se puede pactar el
"otorgamiento de garantías personales y reales y
"que se entenderá que es por el monto del crédito
"ejercido; el 299 impide al acreditante negociar,
"previamente a su vencimiento y sin
"consentimiento del acreditado, los documentos
"que éste hubiere dejado en garantía; el numeral
"300 preceptúa las reglas a seguir para la
"disposición y el pago del crédito y, el 301 enlista
"las causas de extinción del crédito. La detallada
"configuración que se ha reseñado pone de
"manifiesto que el legislador no incurrió en olvido
"u omisión en cuanto a la potestad de las partes
"para pactar que los intereses vencidos y no
"pagados puedan, a su vez, generar nuevos
"intereses, o la capitalización de intereses en este
"tipo de contratos; por el contrario, la supresión
"realizada en la ley sobre esos puntos se debe
"interpretar en el sentido de que tales cuestiones
"se dejaron a la libre voluntad de las partes, con la
"única salvedad de que, cuando en tales
"convenciones funja como acreditante una

"institución de banca múltiple, deberá cumplir con
 "las regulaciones que sobre el particular expida
 "(como ya lo ha hecho para determinados créditos)
 "el Banco de México. Esto último deriva de que los
 "artículos 6º, párrafo primero y 48, párrafo primero,
 "de la Ley de Instituciones de Crédito, someten a
 "las instituciones de banca múltiple,
 "específicamente en cuanto a las tasas de interés y
 "demás características de las operaciones activas
 "que celebren, a las disposiciones de la Ley del
 "Banco de México y, esta otra, en sus artículos 24 y
 "26 respectivamente, faculta al Banco de México
 "para expedir disposiciones generales con el
 "propósito, entre otros, de proteger los intereses
 "del público, y establece que las características de
 "las operaciones activas, pasivas y de servicios
 "que realicen las instituciones de crédito se
 "ajustarán a las disposiciones del Banco Central.
 "De todo lo expuesto se desprende que las normas
 "legales especiales que regulan el contrato de
 "apertura de crédito no adolecen de deficiencia
 "alguna sobre el punto de que se trata, motivo por
 "el cual el artículo 2397 del Código Civil para el
 "Distrito Federal en Materia Común y para toda la
 "República en Materia Federal, no resulta aplicable
 "supletoriamente a dichas disposiciones".



II. Una vez que este Alto Tribunal ha llegado a la conclusión de que los artículos del 291 al 301 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito regulan plenamente el contrato de apertura de crédito, por lo que para determinar la validez jurídica de lo pactado en éste, respecto de la capitalización de intereses, no es necesario acudir a la supletoriedad del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, dado que diversos Tribunales Colegiados de Circuito han sustentado posturas contradictorias en relación a si la validez del pacto de capitalización de intereses que se acuerda en el contrato en comento tiene su origen en la supletoriedad del artículo 363 del Código de Comercio o bien en la voluntad de las partes que convienen la aplicación de tal precepto, se impone resolver esta otra oposición de criterios.

Ahora bien, en relación con lo anterior, destaca que en las sentencias emitidas por los Tribunales Colegiados Primero, Tercero y Quinto en Materia Civil del Primer Circuito y Primero del Décimo Sexto Circuito, marcadas para su consulta con los números 5, 7 y 8; 15 y 18; 21, 22, 24 y 25; y, 114, 117, 119, 121, 123, 126 y 127, en el legajo de ejecutorias en contradicción, mencionado en el resultando octavo de este fallo; tales órganos jurisdiccionales sostuvieron, medularmente, que para determinar la validez del contrato de apertura de crédito en el que se pacte la capitalización de intereses, debe tomarse en cuenta que dicho contrato se rige por el Código de Comercio, es decir, que al respecto opera la supletoriedad del artículo 363 de este último ordenamiento, en relación con lo dispuesto en los artículos del

291 al 301 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito que rigen al contrato en comento.

La postura adoptada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito se plasma en la ejecutoria 5 del legajo, emitida al resolver el amparo directo **964/97**, en la cual sostuvo:

***"En este orden, de conformidad con el artículo 78,
"del Código de Comercio, en las convenciones
"mercantiles cada parte se obliga en la manera y
"términos que aparezca que quiso obligarse, sin
"que la validez del acto comercial dependa de la
"observancia de formalidades o requisitos
"determinados. --- En este entendido, por ser un
"acto de comercio el contrato de apertura de
"crédito con garantía hipotecaria, debe regirse por
"las disposiciones del Código de Comercio y leyes
"colaterales a ella, sin que se dé la suplencia de la
"ley común cuando exista precepto aplicable al
"caso concreto..."***

En términos análogos se pronunciaron el resto de los Tribunales Colegiados de Circuito que comparten el criterio anteriormente transcrito.

En cambio, en oposición a la postura antes relatada, en las ejecutorias dictadas por los Tribunales Colegiados Segundo y

CONTRADICCION DE TESIS 31/98.



Noveno en Materia Civil del **Primer Circuito**, Segundo en Materia Civil del **Séptimo Circuito** y Segundo del **Décimo Primer Circuito**, visibles en el citado legajo con los números 12; 53; 77, 79 y 80; y, 91, 92, 93, 94 y 95; resalta que para dichos órganos la validez jurídica del pacto de capitalización de intereses realizado en un contrato de apertura de crédito tiene su origen, esencialmente, en la regulación propia que de tal contrato prevén los artículos antes mencionados de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y en el hecho de que las partes así lo hayan convenido por lo que, en todo caso, la aplicación del artículo 363 del Código de Comercio surge del acuerdo de voluntades; de donde se sigue que, implícitamente, reconocen que en el caso concreto no se produce la supletoriedad de este último ordenamiento.

El argumento conducente que lleva a concluir que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito se pronunció implícitamente en el sentido antes referido, se encuentra plasmado en la ejecutoria 12 del legajo, correspondiente al amparo directo **10992/97**, en la cual sostuvo:

"Por otra parte y como acertadamente lo resolvió la Sala y contrariamente a lo aducido por el peticionario de garantías, en la especie no existió la ilicitud en el objeto, fin o condición del contrato de crédito simple básico de la acción, en relación con el cálculo y pago de los intereses ordinarios y moratorios convenidos por las partes, toda vez

*"que el contrato base de la acción es de naturaleza
"mercantil, por lo cual el pacto de refinanciamiento
"o crédito adicional, no es ilícito porque exista
"pacto de capitalizar intereses, ya que es permitido
"en la materia mercantil cuando así lo convienen
"expresamente las partes contratantes, lo que en el
"caso aconteció pues del contrato básico aparece
"que se establece claramente:*

"...

*"Siendo claro como lo considera la Sala que en las
"cantidades parciales que corresponde pagar al
"actor en relación con el crédito obtenido, se vean
"reflejados en los estados de cuenta por los
"conceptos que se indican en los mismos, sin que
"la inexactitud en el cálculo de los intereses
"pactados por las partes, implique la ilicitud de lo
"convenido, pues como ya se ha dicho la
"legislación mercantil prevé la capitalización de
"intereses y como en la especie se convino de
"manera expresa dicha capitalización, puesto que
"ésta forma parte de las cláusulas contenidas en el
"contrato básico de la acción, no existe la causa de
"nulidad pretendida por la actora, conforme con lo
"dispuesto por el artículo 363 del Código de
"Comercio que a la letra dice: 'Los intereses
"vencidos y no pagados no devengarán intereses.*

CONTRADICCION DE TESIS 31/98.



**"Los contratantes podrán sin embargo
"capitalizarlos', porque del texto legal anterior, se
"evidencia con toda claridad que dicho dispositivo
"legal deja expedito el derecho de las partes, si así
"conviene a sus intereses, para que, a la
"celebración del contrato, puedan pactar la
"capitalización de los intereses."**

Asimismo, el pronunciamiento tácito del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, deriva de lo dispuesto en la ejecutoria 53 del legajo, que dictó al resolver el amparo directo **3209/98**, de cuyo texto destaca:

**"Ahora bien, aun cuando los dictámenes contables
"emitidos por el perito de la actora y el perito
"tercero en discordia, coinciden en determinar que
"en el caso existió capitalización de intereses y
"lesión civil; sin embargo, por una parte, de la
"cláusula quinta del contrato base no se advierte
"que exista capitalización de intereses y, por otra,
"no se está en el caso de un contrato celebrado
"entre particulares, sino de un contrato efectuado
"entre particulares con una institución de crédito,
"por lo que no tiene aplicación lo dispuesto por el
"artículo 2395 del Código Civil. Es así, en virtud de
"que las operaciones que realizan los Bancos se
"regulan por la legislación mercantil respectiva,
"conforme se establece en el artículo 291 de la Ley**

*"General de Títulos y Operaciones de Crédito, y la
"fracción XIV del artículo 75 del Código de
"Comercio, resultando evidente que dichas
"instituciones siempre establecen intereses
"elevados sobre el crédito otorgado, por la labor
"financiera que desempeñan, y no por ello puede
"solicitarse con posterioridad la reducción de esos
"intereses por resultar excesivos, máxime si los
"mecanismos para su cálculo se establecieron
"desde el momento de la firma del contrato que los
"contiene..."*

En sentido análogo, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito resolvió el amparo directo 928/97, que corresponde a la ejecutoria 80 del legajo, de la cual resalta lo siguiente:

*"Por otra parte, aun cuando en la cláusula
"decimonovena indicada, se haya pactado la
"capitalización de los intereses generados y, que
"por ello, de suyo, pudiera ser nula dicha cláusula,
"lo cierto es que, en la especie, debe tenerse en
"cuenta lo dispuesto por el artículo 363 del Código
"de Comercio, que a la letra dice:- - -'Los intereses
"vencidos y no pagados no devengarán intereses.
"Los contratantes podrán, sin embargo,
"capitalizarlos';- - - Una sana interpretación de
"dicha norma legal, lleva a concluir que en ella se*



*"contemplan dos hipótesis, a). Prohibición de que
"los intereses vencidos generen a su vez intereses
"y, b). La posibilidad de que los contratantes
"convengan en capitalizar los intereses vencidos.
"En el primer supuesto, se está en un caso de
"anatocismo, el cual por ser contrario al espíritu de
"la ley no debe surtir efectos; en el segundo
"aspecto, el legislador dejó abierta la probabilidad
"de que, a voluntad de los contratantes, los
"intereses vencidos y no cubiertos formen parte
"del capital; esto es, para que se dé este último
"caso, debe existir consenso expreso de ambos
"contratantes, lo cual aconteció en la especie,
"como se aprecia de la referida cláusula décima
"novená del contrato de crédito base de la
"acción...".*

Por último, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, en la ejecutoria 94 del legajo, relativa al amparo directo **280/98**, implícitamente se pronunció en el mismo sentido, al sostener:

*"El artículo 363 del Código de Comercio, dispone
"que los intereses vencidos y no pagados no
"devengarán a su vez intereses, pero los
"contratantes podrán, sin embargo, capitalizarlos.
"Y, como tal precepto no hace reserva alguna
"acerca de cuándo debe hacerse ese convenio de*

*"capitalización, es decir, si se podrá llevar a cabo
 "aun cuando no se hayan vencido los intereses o
 "sólo cuando éstos ya se hubieren devengado, es
 "inconcuso que dicho consenso de capitalización
 "es susceptible de celebrarse aún antes de que se
 "generen los intereses que eventualmente lleguen
 "a producirse y que no se paguen
 "oportunamente.--- Así pues, si bien el precepto en
 "comento prohíbe que los réditos vencidos y no
 "pagados no generarán intereses, pero permite que
 "los contratantes, previo convenio, los capitalicen;
 "no queda sino concluir que es válida la
 "estipulación que al respecto las partes
 "consignaron en la cláusula novena del contrato
 "accionado...".*



Como se advierte de lo anterior, en relación con el pacto de capitalización de intereses celebrado en un contrato de apertura de crédito, el punto de contradicción consistente en determinar si dicho contrato se encuentra plenamente regulado en los artículos del 291 al 301 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito y, por tanto, es innecesario acudir a las fuentes de supletoriedad que establece el artículo 2° del propio ordenamiento; o bien, si la reglamentación especial del referido contrato adolece de lagunas, ya quedó resuelto en el apartado I que antecede, aunque ahí se hizo para establecer la no supletoriedad del artículo 2397 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.

CONTRADICCION DE TESIS 31/98.



Las razones expresadas sobre el particular son aptas asimismo para sustentar la conclusión de que el artículo 363 del Código de Comercio tampoco es aplicable supletoriamente para decidir sobre la validez de la capitalización de intereses convenida en un contrato de apertura de crédito, pues, como ya se dijo, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito no prohíbe ni condiciona ese acuerdo, sino que lo deja a la libre voluntad de las partes, motivo por el cual no requiere ser suplida; sin embargo, se advierte que en algunas de las ejecutorias que configuran esta contradicción, los Tribunales Colegiados de Circuito dan cuenta de que, al pactar la capitalización de intereses, las partes invocaron el artículo 363 del Código de Comercio, con expresión de su voluntad en el sentido de que tal convención se rige precisamente por ese precepto, lo cual produce una situación jurídica diferente a la supletoriedad, que debe ser precisada por esta Suprema Corte.

Al respecto debe decirse que la libre voluntad de las partes al celebrar un contrato no tiene más restricciones que aquellas establecidas en la ley; y que no existe prohibición alguna para que se pacte la aplicación de leyes distintas de la que rige el acto jurídico, cuando se quieren sustraer de ese régimen algunos de sus efectos, motivo por el cual la decisión de los contratantes en el sentido de que la capitalización de intereses se pacta en los términos del artículo 363 del Código de Comercio, se debe respetar aunque dicho precepto no forme parte de los que rigen el contrato de apertura de crédito ni tenga el carácter de norma

supletoria, pues, por encima de esas circunstancias se erige la voluntad de las partes, mediante la cual le otorgan el valor de norma contractual, que es ley para ellas; conclusión que tiene su origen en el principio general que rige en derecho privado, conforme al cual en las convenciones cuyos efectos se limiten al ámbito personal de las partes que las celebran, por no trascender al terreno público, lo que no está prohibido por la ley, está permitido.

En consecuencia debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio de este Tribunal Pleno en la tesis cuyo texto y rubro son los siguientes:

**"CAPITALIZACIÓN DE INTERESES. EL ARTÍCULO
"363 DEL CÓDIGO DE COMERCIO NO ES
"APLICABLE SUPLETORIAMENTE AL CONTRATO
"DE APERTURA DE CRÉDITO, PERO SÍ PUEDE
"SERLO COMO NORMA CONTRACTUAL, POR
"VOLUNTAD DE LAS PARTES. Lo dispuesto en los
"artículos del 291 al 301 de la Ley General de
"Títulos y Operaciones de Crédito pone de
"manifiesto que el legislador, al establecer y
"regular el contrato de apertura de crédito, no
"incurrió en olvido u omisión en cuanto a la
"potestad de las partes para pactar que los
"intereses vencidos y no pagados puedan, a su
"vez, generar nuevos intereses, o la capitalización
"de intereses en este tipo de contratos; por el**

CONTRADICCION DE TESIS 31/98.



"contrario, la supresión realizada en la ley sobre
"esos puntos se debe de interpretar en el sentido
"de que tales cuestiones se dejaron a la libre
"voluntad de las partes, con la única salvedad de
"que, cuando en tales convenciones funja como
"acreditante una institución de banca múltiple,
"deberá cumplir con las regulaciones que sobre el
"particular expida (como ya lo ha hecho para
"determinados créditos) el Banco de México. Esto
"último deriva de que los artículos 6°, párrafo
"primero, y 48, párrafo primero, de la Ley de
"Instituciones de Crédito, someten a las
"instituciones de banca múltiple, específicamente
"en cuanto a las tasas de interés y demás
"características de las operaciones activas que
"celebren, a las disposiciones de Ley del Banco de
"México y, esta otra, en sus artículos 24 y 26,
"respectivamente, faculta al Banco de México para
"expedir disposiciones con el propósito, entre
"otros, de proteger los intereses del público, y
"establece que las características de las
"operaciones activas, pasivas y de servicios que
"realicen las instituciones de crédito se ajustarán a
"las disposiciones del Banco Central. De todo lo
"expuesto se desprende que las normas legales
"especiales que regulan el contrato de apertura de
"crédito no adolecen de deficiencia alguna sobre el
"punto de que se trata, motivo por el cual, el

"artículo 363 del Código de Comercio no resulta aplicable supletoriamente a dichas disposiciones; sin embargo, cuando en el propio contrato de apertura de crédito las partes convienen la capitalización de intereses e invocan para ello el referido precepto legal, entonces sí adquiere aplicabilidad, pero esto sucede en observancia del principio de que la libre voluntad de las partes es ley para ellas y no porque fuera necesario acudir a esa disposición, ni a ninguna otra, como norma supletoria."

III. Como ha quedado precisado, el contrato de apertura de crédito se encuentra regulado a cabalidad en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por lo que para determinar la validez jurídica de la capitalización de intereses que se pacte en tal convención no resulta supletorio el artículo 363 del Código de Comercio. Sin embargo, las partes pueden pactar dicha capitalización en términos de este último numeral. En ese contexto, dado que diversos Tribunales Colegiados de Circuito han sustentado criterios contradictorios en relación con la interpretación y, en su caso, integración de lo dispuesto en el referido precepto del código mercantil, este Alto Tribunal se ocupa, a continuación, de precisar los motivos que conducen a concluir que se trata de una disposición jurídica que no adolece de lagunas, por lo que para su debida interpretación es innecesario acudir, supletoriamente, al artículo 2397 del Código



Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.

Al respecto, debe señalarse que en las sentencias emitidas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo, Tercero y Quinto en Materia Civil del **Primer Circuito**, Segundo en Materia Civil del **Séptimo Circuito**, Segundo del **Décimo Primer Circuito** y Primero del **Décimo Sexto Circuito**, en las ejecutorias visibles en el legajo correspondiente, con los números 5, 7 y 8; 12; 15 y 18; 21, 22, 24 y 25; 80; 91 y 93; y, 114, 117, 119, 121, 123, 126 y 127; dichos órganos sostuvieron que si las partes pactaron la capitalización de intereses en términos de lo dispuesto en el artículo 363 del Código de Comercio, al celebrar un contrato de apertura de crédito, de la interpretación de dicho numeral se llega a la conclusión de que sí es válido que tal pacto tenga lugar con anticipación a que los intereses se encuentren vencidos y no pagados, pues la claridad de la redacción de este numeral y la naturaleza mercantil del acuerdo de voluntades impiden, inclusive, la aplicación supletoria del artículo 2397 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.

En relación con tal postura, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostuvo, al resolver el amparo **964/97**, identificado como ejecutoria 5 en el mencionado legajo, lo siguiente:

***"El artículo 363 del Código de Comercio establece
"que los intereses vencidos y no pagados no
"devengarán intereses, sin embargo también dice
"que los contratantes, podrán capitalizarlos.- - En
"efecto, se desprende una prohibición de que los
"intereses que se hayan vencido generen a su vez
"intereses, sin embargo se prevé la posibilidad de
"que los intereses vencidos se puedan capitalizar
"con el previo acuerdo de las partes."***

A su vez, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al dictar la sentencia correspondiente al amparo directo **10992/97**, identificada como ejecutoria 12 en el respectivo legajo, argumentó:

***"...pues como ya se ha dicho la legislación
"mercantil prevé la capitalización de intereses y
"como en la especie se convino de manera expresa
"dicha capitalización, puesto que ésta forma parte
"de las cláusulas contenidas en el contrato básico
"de la acción, no existe la causa de nulidad
"pretendida por la actora, conforme con lo
"dispuesto por el artículo 363 del Código de
"Comercio que a la letra dice: Los intereses
"vencidos y no pagados no devengarán intereses.
"Los contratantes podrán sin embargo
"capitalizarlos., porque del texto legal anterior, se
"evidencia con toda claridad que dicho dispositivo***



*"legal deja expedito el derecho de las partes, si así
"conviene a sus intereses, para que, a la
"celebración del contrato, puedan pactar la
"capitalización de los intereses, en tal virtud como
"es de verse, no es exacto como lo pretende el
"quejoso que el anatocismo esté prohibido por la
"ley, ya que la aplicable en la especie, la mercantil,
"lo permite y sólo la condiciona a que las partes la
"convengan, es decir que la consignent en el
"contrato de que se trate, lo que en la especie
"aconteció."*

En el mismo sentido, el Tercer Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Primer Circuito, en la ejecutoria 18 del legajo,
dictada en el amparo directo **11203/97**, arribó a la siguiente
conclusión:

*"Por otra parte debe decirse que el artículo 363 del
"Código de Comercio dispone que los intereses
"vencidos y no pagados no devengarán intereses y
"que los contratantes podrán sin embargo
"capitalizarlos, y si bien es verdad que dicha
"capitalización puede generarse por convenio una
"vez causados dichos intereses, no lo es menos
"que las partes válidamente pueden pactar en
"forma anticipada dicha capitalización en el
"momento de celebrarse el contrato, pues de la*

***"lectura del citado numeral no se advierte
"prohibición alguna a ese respecto..."***

Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al dictar la resolución correspondiente al amparo directo **5295/97**, reconocida como ejecutoria 22 en el citado legajo, sostuvo:

***"Aduce el quejoso que se violó en su perjuicio el
"artículo 363, del Código de Comercio, pues la sala
"responsable no tomó en cuenta que en el contrato
"de apertura de crédito base de la acción, "...no
"existe voluntad expresa de capitalizar los
"intereses..."- - -Es infundado el argumento del
"quejoso.- - - En efecto, el artículo 363 del Código
"de Comercio dice: "ARTICULO 363.- Los intereses
"vencidos y no pagados no devengarán intereses.
"Los contratantes podrán, sin embargo,
"capitalizarlos." - - - Como se ve, la capitalización
"de los intereses es una cuestión que no es nula de
"pleno derecho en materia mercantil, pues pueden
"las partes pactar esa cuestión.- - - Asistió razón a
"la sala responsable en la resolución que se
"reclama, pues en efecto, en los contratos
"mercantiles las partes que lo celebran, en
"ejercicio de la libertad contractual que les otorga
"el artículo 78 del Código de Comercio, se obligan
"en la manera y términos que aparezca que***

CONTRADICCION DE TESIS 31/98.



"quisieron obligarse.- - De esa manera, si el
 "acreditado se obligó a pagar los intereses en los
 "términos y bajo las condiciones pactadas en el
 "contrato en cuestión, en tales términos y
 "condiciones está obligado a cubrir el indicado
 "concepto.- - Por consiguiente si las partes
 "también pactaron la capitalización de los
 "intereses, tal pacto, como ya se dijo, no es nulo de
 "pleno derecho; sin que sea aplicable el artículo
 "2397 del Código Civil para el Distrito Federal que
 "prohíbe que en los contratos se pacte la
 "capitalización de los intereses, pues en el
 "particular, se trata de un contrato que se rige por
 "las disposiciones del Código de Comercio".

A su vez, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del
 Séptimo Circuito concluyó, al resolver el amparo directo 928/97,
 correspondiente a la ejecutoria 80 del legajo, lo siguiente:

"Por otra parte, aun cuando en la cláusula
 "decimonovena indicada, se haya pactado la
 "capitalización de los intereses generados y, que
 "por ello, de suyo, pudiera ser nula dicha cláusula,
 "lo cierto es que, en la especie, debe tenerse en
 "cuenta lo dispuesto por el artículo 363 del Código
 "de Comercio, que a la letra dice:- - 'Los intereses
 "vencidos y no pagados no devengarán intereses.
 "Los contratantes podrán, sin embargo,

"capitalizarlos'. - - -Una sana interpretación de
"dicha norma legal, lleva a concluir que en ella se
"contemplan dos hipótesis, a). Prohibición de que
"los intereses vencidos generen a su vez intereses
"y, b). La posibilidad de que los contratantes
"convengan en capitalizar los intereses vencidos.
"En el primer supuesto, se está en un caso de
"anatocismo, el cual por ser contrario al espíritu de
"la ley no debe surtir efectos; en el segundo
"aspecto, el legislador dejó abierta la probabilidad
"de que, a voluntad de los contratantes, los
"intereses vencidos y no cubiertos formen parte
"del capital; esto es, para que se dé este último
"caso, debe existir consenso expreso de ambos
"contratantes, lo cual aconteció en la especie,
"como se aprecia de la referida cláusula décima
"novena del contrato de crédito base de la acción,
"que dice: 'EL COBRO DE INTERESES
"GENERADOS SERA ACUMULABLE AL
"VENCIMIENTO DEL CREDITO Y CAPITALIZABLE
"MENSUALMENTE, UTILIZANDO EL SISTEMA DE
"SALDOS AUTOMATICOS'; pero además, como
"bien lo dijo la responsable, no se actualizó el
"supuesto contemplado en dicha cláusula, ya que
"en la certificación contable, no se advierte que se
"haya aplicado la misma, pues no se capitalizó
"interés alguno, sino que el interés normal, fue a la
"base, únicamente, del capital inicial; por ende, no



*"es ilegal lo que estimó la ad quem con relación a
"que los artículos 362 y 363 del Código de
"Comercio, no prohibían en forma absoluta el
"anatocismo, pues a más que es cierto, como se
"dejó demostrado, en la especie no se dio esa
"hipótesis."*

En sentido análogo, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al dictar la resolución correspondiente al amparo directo **271/98**, identificada como ejecutoria 93 en el legajo, brindó los argumentos que a continuación se reproducen:

*"Es cierto, como lo refiere el quejoso, que existe
"supletoriedad del Código Civil a la Ley Mercantil
"cuando la figura o institución de que se trata no se
"encuentra prevista de modo expreso en el Código
"de Comercio, o encontrándose, su regulación es
"omisa, deficiente o incompleta. Sin embargo, en
"tratándose de la causal de nulidad del contrato
"base de la acción, por la capitalización de
"intereses no es factible dicha supletoriedad, ya
"que tal acto jurídico se encuentra regulado por el
"artículo 363 del Código de Comercio, de cuyo
"contenido revela contradicciones inconciliables
"con el diverso artículo 2397 del Código Civil para
"el Distrito Federal en Materia Común y para toda la
"República en Materia Federal, ya que mientras el
"primero dispone: - - - "Los intereses vencidos y no*

*"pagados no devengarán intereses. Los
 "contratantes podrán, sin embargo, capitalizarlos;
 "el segundo por su parte establece: Las partes no
 "pueden, bajo pena de nulidad convenir de
 "antemano que los intereses se capitalicen y que
 "produzcan intereses.- - - Contradicción que
 "excluye por sí misma cualquier posibilidad de
 "supletoriedad al respecto; tanto más, cuanto que
 "la primera de las disposiciones legales, en
 "comento no requiere interpretación sobre si los
 "contratantes podrán pactar la capitalización aún
 "cuando no se hayan vencido los intereses o sólo
 "cuando dichos intereses ya se hubieran
 "devengado, en virtud de que al no hacer distinción
 "a cuándo podrá hacerse esa capitalización por los
 "contratantes, es incuestionable que se puede
 "efectuar aún antes de que se generen los
 "intereses".*

Por último, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito concluyó, al resolver el amparo directo 702/97, ejecutoria 119, lo siguiente:

*"Así, el artículo 363, del Código de Comercio,
 "establece, que los intereses vencidos y no
 "pagados, no deben generar intereses, sin
 "embargo, también precisa que los contratantes
 "podrán capitalizarlos.- - - En efecto, existe una*



*"prohibición de que los intereses que se hayan
"vencido, generen a su vez intereses, pero, se
"prevé la posibilidad de que los intereses vencidos,
"se puedan capitalizar con el previo acuerdo de las
"partes.- - Por lo que, si en el caso concreto, las
"partes convinieron en la apertura de un crédito
"adicional, en favor del acreditado, con el fin de
"cubrir discrecionalmente, parte de los intereses a
"pagar, ese pacto suscrito por las partes, no puede,
"de modo alguno, entrañar pacto de
"anatocismo..."*

En oposición al criterio sostenido por los órganos mencionados, los Tribunales Colegiados Séptimo y Octavo en Materia Civil del **Primer Circuito**, Segundo del **Décimo Sexto Circuito**, Segundo del **Décimo Séptimo** y Primero del **Vigésimo Segundo Circuito**, al emitir las sentencias visibles con los números 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 y 40; 44 y 45; 132 y 136; 138 y 139; y, 190, 191, 192, 194 y 195, en el legajo de ejecutorias en contradicción, sostienen que el pacto de capitalización de intereses que se convenga al celebrar un contrato de apertura de crédito transgrede lo dispuesto en el artículo 363 del Código de Comercio, pues éste prohíbe el convenio anticipado de capitalización de intereses, fundando su interpretación en la aplicación supletoria del artículo 2397 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.

La anterior postura fue plasmada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo **6397/97**, que corresponde a la ejecutoria 34 del mencionado legajo, concluyendo lo siguiente:

*"...se infringen en el caso los artículos 363, del
"Código de Comercio y 2397, del Código Civil para
"el Distrito Federal, que dicen: - - - 'Art. 363.- Los
"intereses vencidos y no pagados no devengarán
"intereses. Los contratantes, podrán, sin embargo,
"capitalizarlos'. 'Art. 2397.- Las partes no pueden,
"bajo pena de nulidad, convenir de antemano que
"los intereses se capitalicen y que produzcan
"intereses'. --- Dichos numerales, con
"independencia de lo que pudiera decirse respecto
"a su aplicación al caso, tienen en común la
"prohibición de convenir de antemano la
"capitalización de intereses, que es lo que
"constituye el llamado pacto de anatocismo, el que,
"cabe subrayar, es distinto del convenio que de
"acuerdo con la normatividad mercantil las partes
"pueden celebrar válidamente después de que se
"hubieren devengado ya los intereses, para que en
"lugar de pagarse esos intereses a la sazón ya
"causados, se incorporen al capital para producir
"nuevos intereses... --- Se está entonces en
"presencia de un acto simulado, que encierra el*



*"pacto de anatocismo, prohibido por los artículos
"363, del Código de Comercio y 2397, del Código
"Civil, para el Distrito Federal, que está probado en
"la especie en virtud del propio instrumento
"público en que consta el esquema financiero a
"discusión y de lo dicho al contestarse la demanda
"en sentido de que el documento exhibido como
"base de la acción contiene la voluntad de las
"partes, ratificada al momento de su suscripción,
"pues no puede arribarse a conclusión diferente,
"merced a la firma del contrato por los acreditados
"y a los pagos por éstos efectuados, ya que la
"autoridad responsable pasó por alto que la causa
"de nulidad, en la especie, no resulta de vicios de
"la voluntad que puedan purgarse con la conducta
"atribuida a los quejosos, sino de aquella que
"proviene por actos ejecutados contra el tenor de
"leyes prohibitivas, en términos del artículo 8° del
"Código Civil, a saber, de los artículos 363 del
"Código de Comercio y 2397 del propio
"ordenamiento sustantivo, en virtud de la
"simulación habida en el convenio realizado de
"antemano para capitalizar intereses devengados
"no cubiertos o anatocismo..."*

En términos análogos, el Octavo Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Primer Circuito, al dictar la sentencia

correspondiente al amparo directo 1088/97, identificada como ejecutoria 44 en el legajo respectivo, sostuvo:

"Así tenemos, que el artículo 2397 del Código Civil para el Distrito Federal, de aplicación supletoria al caso concreto, es claro y determinante en que la capitalización de intereses no se puede convenir de antemano; dicho de otra forma, el Código Civil para el Distrito Federal, al igual que el Código de Comercio prevé implícitamente la posibilidad de capitalizar intereses vencidos, pero cuando tengan esta característica y no con anterioridad a que sean generados, y la sanción a convenir de antemano tales intereses es la nulidad, conforme al precepto legal invocado con antelación.- -En resumen, de una interpretación armónica, lógica jurídica de los artículos 363 del Código de Comercio, parte final y 2397 del Código Civil para el Distrito Federal, de aplicación supletoria, es manifiesta la posibilidad de que las partes contratantes en negocios de naturaleza mercantil, puedan capitalizar intereses siempre y cuando éstos sean vencidos; y tal pacto por tanto no puede celebrarse de antemano bajo pena de nulidad".

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito fijó su postura, al resolver el amparo directo



646/97, que corresponde a la ejecutoria 132 del legajo, en los siguientes términos:

*"Así las cosas, es inconcuso que cada una de las
"disposiciones que los acreditados hicieran del
"crédito adicional', sería considerada como un
"capital que devengaría intereses en la misma
"cuantía a los generados por el 'crédito inicial'; en
"ese orden, los intereses derivados del 'crédito
"inicial' se convierten en un capital que también
"ganará intereses; en ese entendido, la Sala
"responsable, obró correctamente, al considerar
"que el 'crédito adicional', constituía una
"capitalización de intereses disfrazada, contraria a
"lo establecido por los ordinales 363 del Código de
"Comercio y 2397 del Código Civil del Distrito
"Federal.- - Ahora bien, el numeral 363 del Código
"de Comercio, otorga a las partes la posibilidad de
"capitalizar los intereses vencidos; empero, ello no
"significa que permita la celebración de convenios
"en los que anticipadamente se estipule la
"capitalización de intereses, cuando éstos todavía
"no se han generado, como acertadamente lo
"estimó la responsable, puesto que dicho
"dispositivo prevé que los intereses vencidos y no
"cubiertos no devengarán intereses, que sin
"embargo podrán capitalizarlos, pero no que dicha
"capitalización pueda estipularse previamente al*

*"vencimiento de aquellos; además, el texto legal en
"comento, debe analizarse a la luz del diverso
"artículo 2397 del Código Civil del Distrito Federal,
"que establece, bajo pena de nulidad, que los
"contratantes no pueden convenir de antemano
"que los intereses se capitalicen y devenguen
"intereses, precepto legal que en la especie, resulta
"de aplicación supletoria al primeramente
"invocado, según dispone el ordinal 81 del
"ordenamiento mercantil; de tal forma, cuando los
"intereses aún no se generan, no pueden ser objeto
"de un acuerdo que establezca su capitalización."*

Igualmente, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito consideró, al resolver el amparo directo 826/97, que corresponde a la ejecutoria 138 del legajo, lo siguiente:

*"...lo que esta prohibido por el artículo 363 del
"Código de Comercio, al establecer que los
"intereses vencidos y no pagados no devengarán
"intereses, pero que los contratantes podrán
"capitalizarlos, lo que implica que la norma aludida
"prohíbe que antes de que se generen no puede
"pactarse su capitalización, pues se refiere a
"intereses vencidos, corroborándose lo que
"establece el artículo de referencia con el
"contenido del artículo 2397 del Código Civil del
"Distrito Federal, cuyo contenido es similar al 2293*



*"del Código Civil del Estado de Chihuahua, al
"indicar que las partes no pueden, bajo pena de
"nulidad, convenir de antemano que los intereses
"se capitalicen y que produzcan intereses, por lo
"que si en el contrato se pactó así, ello es nulo, aun
"y cuando las partes lo hayan convenido en forma
"expresa, pues tal convenio fue ejecutado contra el
"tenor de una ley prohibitiva de orden público y de
"acuerdo con lo que establece el artículo 8° del
"Código Civil del Distrito Federal y el similar de
"este Estado, son nulos".*

Por último, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito llegó a la misma conclusión, al dictar la sentencia relativa al amparo directo **253/98**, identificada como ejecutoria 194 en el respectivo legajo, en la que sostuvo:

*"Por otra parte, si bien es cierto que el artículo 78
"del Código de Comercio establece la libertad de
"las partes para convenir las cláusulas que sean
"necesarias, también lo es que el amparista
"desatiende el hecho de que esa libertad tiene
"ciertas licitantes, como en este caso lo son las
"normas prohibitivas, específicamente la contenida
"en el artículo 363 del Código de Comercio y la
"relativa al artículo 2397 del Código Civil Federal,
"invocados por la autoridad responsable, que no
"dejan lugar a dudas sobre la intención del*

*"legislador federal, de prohibir la capitalización
 "anticipada de intereses, bajo pena de nulidad para
 "el convenio que incurra en esos desacatos.- - -En
 "tales condiciones, la libertad consagrada en el
 "artículo 78 del Código de Comercio, no puede
 "llevarse al extremo de transgredir una norma
 "prohibitiva, sino que se debe armonizar el
 "contenido de ambos preceptos, mediante la
 "conclusión de que dicha voluntad de convenir,
 "tiene las limitantes que la autoridad responsable
 "estableció en la sentencia reclamada, en
 "observancia de disposiciones legales aplicables al
 "caso específico, respecto a la prohibición de
 "capitalizar anticipadamente los intereses, por ser
 "una norma de carácter prohibitivo, siendo
 "pertinente recordar que de conformidad con el
 "artículo 8o del Código Civil Federal, aplicado
 "supletoriamente al de la materia, los actos
 "ejecutados contra el tenor de las leyes
 "prohibitivas o de interés público serán nulos,
 "excepto en los casos en que la ley ordene lo
 "contrario, sin que éste sea el caso de excepción a
 "que se refiere el aludido precepto".*

Como se advierte de lo anterior, otro punto de la contradicción consiste en determinar si es jurídicamente válido que, para fijar el alcance del pacto de capitalización de intereses convenido en un contrato de apertura de crédito, en términos del

CONTRADICCION DE TESIS 31/98.



artículo 363 del Código de Comercio, se aplique supletoriamente a lo dispuesto en este último precepto lo establecido en el artículo 2397 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.

Por principio conviene recordar que, como ya quedó asentado, el contrato de apertura de crédito se encuentra plenamente regulado en cuanto a sus aspectos sustantivos en los artículos del 291 al 301 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y, en caso de que las partes acuerden capitalizar los intereses que se generen en términos de lo dispuesto en el artículo 363 del Código de Comercio, tal convención será válida, en términos del artículo 78 de este último ordenamiento, por constituir una expresión de la voluntad de las partes, a través de la cual le otorgan el carácter de norma contractual, que es ley para ellas, y no porque surja la aplicación supletoria de lo dispuesto en este último numeral.

Partiendo de tal premisa debe señalarse que en relación con el punto de contradicción que aquí se aborda, dado que es la voluntad de las partes la que incorpora el pacto de capitalización de intereses, conforme al artículo 363 del código mercantil, al preciso marco jurídico contractual que regula la conducta de éstas, relacionada con el objeto del contrato celebrado, resulta jurídicamente inadecuado pretender la aplicación supletoria de una diversa legislación para fijar el alcance y, en su caso, el apego al orden jurídico de tal convención.

En efecto, cuando la voluntad de las partes incorpora al preciso y temporal marco jurídico contractual que acota su comportamiento, lo dispuesto en un precepto ajeno a la normatividad legal específica y plena que regula el acuerdo de voluntades celebrado, ello implica que, materialmente, la literalidad de la estipulación es extraída del cuerpo jurídico que la contiene e incorporada a un diverso conjunto de normas de carácter contractual, que tiene limitado su alcance a lo acordado por los celebrantes.

De ahí, que al incorporarse lo previsto en una norma jurídica al conjunto de disposiciones que por voluntad legal y contractual rigen a las partes que celebren una convención, si por algún motivo resulta necesario conocer a cabalidad lo que aquéllas quisieron pactar mediante la aplicación de tal dispositivo legal, el análisis conducente deberá realizarse al tenor de lo pactado y, en caso de que ello no genere convicción, será necesario acudir a la interpretación integral de las cláusulas que conforman el convenio, siguiendo las previsiones legales que rigen la interpretación de los contratos.

Así, en virtud de que lo dispuesto en el precepto legal ajeno a la normatividad propia del contrato celebrado se ha desincorporado del cuerpo jurídico que lo contiene, y de que se encuentra integrado en un diverso marco jurídico de naturaleza contractual, la interpretación conducente ya no podrá atender a los principios que, en su caso, sujeten a la que es realizada

CONTRADICCION DE TESIS 31/98.



cuando la aplicación de aquel dispositivo tiene su origen en la voluntad del legislador, ya que al actualizarse lo previsto en él, por la libre expresión de las partes celebrantes de un contrato que no se rige por él, y que, por tanto, está fuera del ámbito personal de validez que legal e inicialmente le fue conferido, su alcance en ese preciso acto, por el carácter de norma contractual del que se ve investido, tendrá su origen únicamente en la voluntad de las partes y para conocerlo deberá acudirse a las reglas que para interpretar los contratos establece la ley.

En ese contexto, si los celebrantes de un contrato de apertura de crédito pactan la capitalización de intereses en términos de lo dispuesto en el artículo 363 del Código de Comercio, en razón de que este numeral, en principio, legalmente no rige a tal especie de convenciones, debe estimarse que, en tal caso, lo dispuesto en él adquiere exclusivamente el rango de norma contractual, por lo que para fijar el alcance de tal convención no podrá acudirse a la supletoriedad de norma legal alguna, menos aún a la del artículo 2397 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, pues únicamente habrá de estarse a lo pactado y en caso de que los términos empleados generen confusión, para conocer la verdadera intención de las partes será necesario recurrir a las reglas de interpretación de los contratos, en específico a las previstas en los artículos 78 del Código de Comercio y del 1851 al 1859 del Código Civil antes referido, que respecto de esta última cuestión sí son supletorios, conforme a lo dispuesto en el artículo 2º, fracción IV, de la Ley General de

Títulos y Operaciones de Crédito. El texto de las reglas conducentes, previstas en los artículos citados es el siguiente:

"Artículo 78. En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados.

"Artículo 1851. Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas.

"Artículo 1852. Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquéllos sobre los que los interesados se propusieron contratar.

"Artículo 1853. Si alguna cláusula de los contratos admitiere diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto.

"Artículo 1854. Las cláusulas de los contratos deben interpretarse las unas por las otras,



"atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte
"del conjunto de todas.

"Artículo 1855. Las palabras que pueden tener
"distintas acepciones serán entendidas en aquella
"que sea más conforme a la naturaleza y objeto del
"contrato.

"Artículo 1856. El uso o la costumbre del país se
"tendrán en cuenta para interpretar las
"ambigüedades de los contratos.

"Artículo 1857. Cuando absolutamente fuere
"imposible resolver las dudas por las reglas
"establecidas en los artículos precedentes, si
"aquellas recaen sobre circunstancias accidentales
"del contrato, y éste fuere gratuito, se resolverán
"en favor de la menor transmisión de derechos e
"intereses; si fuere oneroso se resolverá la duda en
"favor de la mayor reciprocidad de intereses.

"Artículo 1858. Los contratos que no estén
"especialmente reglamentados en este Código, se
"regirán por las reglas generales de los contratos;
"por las estipulaciones de las partes, y en lo que
"fueren omisas, por las disposiciones del contrato
"con el que tengan más analogía, de los
"reglamentados en este ordenamiento.

***"Artículo 1859. Las disposiciones legales sobre
"contratos serán aplicables a todos los convenios
"y a otros actos jurídicos, en lo que no se opongan
"a la naturaleza de éstos o a disposiciones
"especiales de la ley sobre los mismos".***

En conclusión, cuando las partes pactan en un contrato de apertura de crédito la capitalización de intereses en términos del artículo 363 del Código de Comercio, ello implica que lo previsto en este numeral se sustrae de tal ordenamiento, para incorporarse al marco jurídico contractual, por lo que para conocer su alcance, en caso de que los términos empleados generen confusión, deberá acudirse a las reglas que sobre la interpretación de los contratos prevén los preceptos citados.

Por tanto, prevalece con el carácter de jurisprudencia, el criterio de este Tribunal Pleno, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor:

***"CAPITALIZACIÓN DE INTERESES. CUANDO SE
"PACTA EN UN CONTRATO DE APERTURA DE
"CRÉDITO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 363 DEL
"CÓDIGO DE COMERCIO, PARA DETERMINAR SUS
"ALCANCES NO DEBE ACUDIRSE A LA
"SUPLETORIEDAD DEL ARTÍCULO 2397 DEL
"CÓDIGO CIVIL APLICABLE EN MATERIA
"FEDERAL, SINO A LAS REGLAS DE***



"INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS. El
"contrato de apertura de crédito se encuentra
"plenamente regulado en cuanto a sus aspectos
"sustantivos en los artículos del 291 al 301 de la
"Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,
"por lo que cuando las partes celebrantes de una
"convención de tal naturaleza pactan la
"capitalización de intereses invocando el artículo
"363 del Código de Comercio, esto tiene su origen
"en la libre voluntad de aquéllas y no en la
"aplicación supletoria de este último precepto, lo
"que implica que, materialmente, lo previsto en tal
"numeral se sustraiga de tal ordenamiento,
"incorporándose al específico marco jurídico
"contractual. De ahí que, cuando los términos
"empleados para acordar tal pacto generen
"confusión, para conocer la verdadera intención de
"las partes, la interpretación conducente ya no
"podrá atender a los principios que rigen a la que
"es realizada cuando la aplicación de tal
"dispositivo tiene su origen en la voluntad del
"legislador, sino al tenor de las reglas que rigen la
"propia de los contratos, situación que impide
"acudir a la supletoriedad del artículo 2397 del
"Código Civil para el Distrito Federal en Materia
"Común y para toda la República en Materia
"Federal, por lo que, para conocer el alcance del
"pacto en comento, deberá acudirse a las reglas

"sobre interpretación de los contratos que se establecen en los artículos 78 del Código de Comercio y del 1851 al 1859 del Código Civil indicado los que, respecto de esta última cuestión, sí son supletorios, conforme a lo dispuesto en el artículo 2º, fracción IV, de la mencionada Ley General."

SEXTO.- En el acuerdo del Presidente de la Primera Sala de esta Suprema Corte, al denunciar las posibles contradicciones de tesis que se produjeron entre sentencias dictadas por diversos Tribunales Colegiados de Circuito, en relación con temas vinculados con contratos de apertura de crédito y contratos adicionales de refinanciamiento para pago de intereses o de capitalización de intereses, especificó como uno de ellos el siguiente:

"¿LA CLÁUSULA DE CRÉDITO ADICIONAL PARA PAGO DE INTERESES EN UN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO, CONSTITUYE UNA TRANSGRESIÓN A LA PROHIBICIÓN DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE PASIVOS, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 8º DEL REGLAMENTO SOBRE INSTITUCIONES NACIONALES DE CRÉDITO Y ORGANIZACIONES AUXILIARES DE CRÉDITO?"

CONTRADICCION DE TESIS 31/98.



Para determinar si existe la contradicción de tesis sobre el tema precisado, se procedió al examen del legajo de las doscientas siete ejecutorias, debidamente numeradas para facilitar su localización, enviadas por diversos Tribunales Colegiados de Circuito de la República, en las que se abordaron temas vinculados con la cuestión antes precisada. Dicho análisis permitió advertir que el tema referido fue examinado sólo en dieciocho de las ejecutorias, a saber:

Amparo directo civil **6663/97**, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (número 15 del citado legajo); amparo directo civil **4457/97**, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (número 31 del legajo); amparo directo civil **6397/97**, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (número 34 del legajo); amparo directo civil **1037/97**, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (número 36 del legajo); amparo directo civil **1887/98**, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (número 38 del legajo); amparo directo civil **38/97**, del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (número 44 del legajo); amparo directo civil **439/98**, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito (número 70 del legajo); amparo directo civil **486/97**, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito (número 78 del legajo); amparo directo civil **246/97-2**, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito (número 88 del legajo); amparo directo civil **594/97**, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito (número 96

del legajo); amparo directo civil **398/96**, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Cuarto Circuito (número 109 del legajo); amparo directo civil **209/98**, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito (número 112 del legajo); amparo directo civil **693/97**, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito (número 117 del legajo); amparo directo civil **705/97**, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito (número 121 del legajo); amparo directo civil **847/97**, Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito (número 127 del legajo); amparo directo civil **254/97**, del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito (número 156 del legajo); amparo directo civil **137/98**, del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito (número 189 del legajo); y, amparo directo civil **1412/97**, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito (número 197 del legajo).

Mientras las ejecutorias que aparecen señaladas con los números 15, 44, 70, 78, 88, 96, 109, 112, 117, 121, 127, 156, 189 y 197, en el legajo antes mencionado, consideraron que el contrato de apertura de crédito era válido por no ser aplicable el artículo 8° del Reglamento sobre Instituciones Nacionales de Crédito y Organizaciones Auxiliares de Crédito o por no existir la prohibición del préstamo para el pago de pasivos, las que se localizan con los números 31, 34, 36 y 38 del citado legajo llegaron a la conclusión de que el contrato era inválido por ser violatorio del precepto referido que prohíbe el préstamo para el pago de pasivos.